

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

31ª REUNIÓN

26ª SESIÓN ORDINARIA

24 de agosto de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

– En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de agosto de 2016, siendo la hora 16 y 31:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 65 señores legisladores, declaro abierta la 26º sesión ordinaria del 138º período legislativo.

Invito al señor legislador Oscar González a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador González procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSION TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra el legislador Miranda.

Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 19525/L/16 a la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales.

Además, deseo que se incorpore a los legisladores Hugo Cuello, Germán Buttarelli y Miguel Majul como coautores del mencionado proyecto.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador Palloni.

Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Julián López como coautor de los proyectos 19653 y 19654/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.

Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Franco Saillen como coautor del proyecto 19611/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Ezequiel Peressini como coautor del proyecto 19625/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Salas como coautor del proyecto 19628/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Pratto.

Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Brarda y Calvo como coautores de los proyectos 19646 y 19647/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.

-4-

Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 14, 53 y 70 del Orden del Día sean girados al archivo.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 14, 53 y 70 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-5-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 37, 38, 41, 45, 50, 52, 65 al 68, 71, 72, 73 y 87 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 37, 38, 41, 45, 50, 52, 65 al 68, 71, 72, 73 y 87 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.

-6-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 15, 40, 54, 59, 60, 61 y 76 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 15, 40, 54, 59, 60, 61 y 76 del Orden del Día

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.

-7-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3 al 13, 16 al 36, 39, 42, 43, 44, 46 al 49, 51, 55 al 58, 62, 63, 64, 69, 74, 75, 77 al 86, 88, 89 y 90 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3 al 13, 16 al 36, 29, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 55 al 58, 62, 63, 64, 69, 74, 75, 77 al 86, 88, 89 y 90 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.

-8-

Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Exptes. 19637 al 19640, 19643 al 19647, 19649 al 19656.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Expte. 19648/L/16

Sr. Presidente (Llaryora).- Se gira a las comisiones respectivas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho Exptes. 18951/E/16 y 19079/L/16 compatibilizados.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.

-9-

Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se solicita el tratamiento sobre tablas del pliego 19268/P/16, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 24 de agosto de 2016.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 19268/P/16, pliego presentado por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar al abogado José Daniel Cesano como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de Séptima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.

Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.

Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 19268/P/16, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado José Daniel Cesano, DNI 17.386.146, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de Séptima Nominación con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, Acuerdo N° 57 de fecha 18 de diciembre de 2015, que cuenta con despacho.

El abogado Cesano resultó en el octavo lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura para Vocal de Cámara en lo Criminal y Vocal de Cámara de Acusación.

El postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1991.

En cuanto a sus antecedentes académicos, el doctor Cesano es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba; su tesis doctoral se denominó “La pena de multa como sanción del Derecho Penal Común”, obteniendo una calificación de diez sobresaliente.

Asistió a un sinnúmero de cursos de grado y posgrado, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática diversa, pero siempre relacionadas al fuero penal.

Participó en carácter de disertante, expositor y ponente en cursos, jornadas, simposios y congresos organizados por la Universidad Nacional de Córdoba, por el Consejo de Ciencias Económicas de Córdoba, el Tribunal Superior de Neuquén, el Colegio de Abogados de La Pampa, la Universidad Católica de Salta, el Consejo de la Magistratura de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. Estas participaciones siempre estuvieron vinculadas de modo directo con el fuero penal.

También es de destacar que el doctor Cesano es miembro de reconocidas instituciones científicas y profesionales tales como la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Derecho Penal Económico, como así también es miembro titular del Instituto de Ciencias Penales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

En cuanto a sus antecedentes laborales, el señor Cesano ejerció libremente la profesión de abogado desde el año 1991 a 1995, siendo su especialidad en dicho ejercicio el fuero penal. En el año 1995, el doctor Cesano ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Neuquén desempeñándose como Secretario de Instrucción y Correccional, y actualmente, desde el año 2007, se desempeña en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba como Juez de Ejecución Penal de Primera Nominación de la Ciudad de Córdoba.

Podemos mencionar también que el doctor Cesano tiene en su haber numerosas publicaciones científico-jurídicas tales como: “La multa como sanción del Derecho Penal”, publicada en el año 1995 por la Editorial Alveroni; “Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes por mala praxis médica”, publicada en el año 2012 por la Editorial Lerner; “El delito de femicidio”, en el año 2013, y “Homicidio y lesiones imprudentes en el tránsito vehicular”, publicada en el año 2015. También ha sido autor de numerosos artículos, opúsculos y capítulos de libros publicados en el país y en el extranjero.

Se desempeñó en la docencia e investigación universitarias de grado y posgrado; fue docente adscripto a la cátedra de Derecho Penal I en la Universidad Nacional de Córdoba; fue docente por concurso de antecedentes y oposición en la cátedra de Derecho

Constitucional y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba; fue también profesor de posgrado en el Diplomado en Derecho Procesal Penal organizado por la Universidad Nacional de Cuyo; fue docente de posgrado en la Diplomatura en Criminalística y Criminología dictado por la Universidad Empresarial Siglo XXI, y fue profesor de posgrado en la carrera de Especialización en Derecho Penal dictada por la Universidad Nacional de La Rioja.

Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado José Daniel Cesano como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de Séptima Nominación con sede en la Ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: es para solicitar la abstención del bloque del Frente de Izquierda en la votación de este proyecto, pero quiero hacer una reflexión.

Creo que los pedidos de abstención, que ya son una costumbre, tienen un fundamento. Y si se adoptara el método que nosotros planteamos en cuanto a someter a la opinión pública, a la voluntad popular la elección de quienes son los jueces y fiscales, así evitaríamos muchos “Ramírez” y otros que no sabremos porque permitiríamos que la acción de cualquiera que se presente sea pública.

Digo esto para que se note que nuestro planteamiento no es ni caprichoso, ni ideológico.

Nada más.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación respecto al pliego en tratamiento y del próximo que se va a tratar también, donde se plantea la designación de un juez.

Voy a repetir los fundamentos que históricamente ha esgrimido el Frente de Izquierda, el PTS, que son políticos, ideológicos y tienen su fundamento en que creemos que esta Justicia, que está integrada justamente por personajes como Ramírez y otros, tiene que ver con el método de elección.

Al igual que el legislador Salas, sostengo que si estuvieran sometidos a la votación popular, carecieran de los privilegios de jubilaciones altísimas, de la intangibilidad de sus sueldos por lo cual no pagan Impuesto a las Ganancias y fuesen revocables por la voluntad de los electores, evitaría la posibilidad de que estén “tipos” como Ramírez y otros tantos, que muchos servicios le han prestado a la dictadura –como el propio fiscal Trotta anunció cuando estuvo presente en este recinto, que hay en curso una investigación sobre estos personajes. Esto tiene que ver con esos fundamentos, justamente, de que la Justicia que necesitamos los organismos de derechos humanos, los trabajadores, las mujeres y los sectores populares es de otro tipo y radicalmente distinta.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos adelanto el voto afirmativo a este pliego y al próximo.

Pero también deseo dejar sentado –y, en todo caso, voy a pedir que en la presente versión taquigráfica se incorpore la versión taquigráfica del 25 de noviembre de 2015, donde se trató el pliego de Raúl Ramírez– que, más allá de respetar los argumentos que las distintas fuerzas políticas esgrimen para votar o no un pliego, en el caso puntual antes mencionado no hubo, por parte de ninguno de los 70 legisladores sentados en ese momento en las bancas –de los cuales algunos hoy están todavía y se rasgan las vestiduras–, ninguna consideración en particular.

Por lo tanto, en ese contexto es que voy a pedir se incorpore la versión taquigráfica cuando se trató el pliego de Raúl Ramírez.

Nada más.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda incorporada la parte pertinente de la versión taquigráfica. Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente deseo aclarar que quienes defendemos otro método de elección de los jueces, cuando lo consideramos –y en este caso no había pruebas– nos preocupamos de buscar las pruebas. Ahora otros legisladores, que defienden otro sistema de elección de los jueces, en particular, si van a votar por la positiva o la negativa sobre personajes que están en la cúpula de las Fuerzas de Seguridad –y que han estado en cargos de las Fuerzas de Seguridad en momentos en que estallaba el narco-escándalo y otro tipo de escándalos– considero que podrían chequear un poco mejor y tratar de investigar algunos elementos.

Nada más.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: es simplemente para apoyar la moción de la legisladora Montero.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las abstenciones de los dos bloques que así las formularon.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.

La incorporación de la versión taquigráfica ya fue aprobada.

Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca del pliego 18268/P/16:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado José Daniel Cesano, DNI N° 17.386.146, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de Séptima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 57, de fecha 18 de diciembre de 2015.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente leído por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.

Queda así prestado el Acuerdo para que el abogado José Daniel Cesano sea designado Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de la Séptima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA MONTERO

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 17706 y 17711/P/15, despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 25 de noviembre de 2015.

Sra. Presidenta
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno.
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, de los expedientes 17706 y 17711/P/15, pliegos solicitando acuerdo para designar a la abogada Jorgelina Del Valle Gómez como Fiscal de Instrucción con competencia múltiple de Tercer Turno en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz y al abogado Raúl Ramírez como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Cosquín.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.

Sra. Narducci.- Señora presidenta: como miembro informarte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17706/P/15 para designar a la señora abogada Jorgelina Del Valle Gómez, DNI 20.997.188, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, Acuerdo número 13 de fecha 24 de abril de 2015, y al expediente 17711/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Raúl Ramírez, DNI 12.469.240, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Cosquín y jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz, en la Primera Circunscripción y en la Séptima y Novena Circunscripciones Judiciales, Acuerdo 13 de fecha 24 de abril de 2015, los cuales cuentan con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

La abogada Gómez resultó ubicada en segundo lugar para Fiscal de Instrucción con competencia múltiple y en cuarto lugar el abogado Ramírez. El primer lugar fue para el doctor Gesino, aprobado en el Pleno la semana pasada, y el tercer lugar el doctor Horacio Vázquez, quien declinó la sede Cosquín por la cual oportunamente había optado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.

La doctora Gómez se desempeña como Secretaria de la Fiscalía con competencia múltiple del Primer Turno de la Ciudad de Villa Carlos Paz. El letrado Ramírez es abogado de la matrícula, por lo que se ha solicitado informe del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados para que se expida si posee sanciones o causas disciplinarias que inhabiliten el ejercicio de su profesión, siendo la respuesta negativa.

Señores legisladores, la designación del Fiscal de Instrucción responsable de la Investigación de hechos delictivos relacionados con el narcotráfico es un paso más en este objetivo último que es la lucha contra el flagelo de la droga.

Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose impedimentos para prestar acuerdo para designar a los doctores Gómez y Ramírez, expedientes 17706/P/15 y 17711/P/15, es que solicito la aprobación por parte de mis pares.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura a los despachos y se pondrán en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del pliego 17706/P/15:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la abogada Jorgelina del Valle Gómez, DNI 20.997.188, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Tercer Turno, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz. Acuerdo N° 13, de fecha 24 de abril de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 17706/P/15, leído por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.

Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Jorgelina del Valle Gómez sea designada como Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Tercer Turno, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del pliego 17711/P/15:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Raúl Ramírez, DNI 12.469.240, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Cosquín y jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz, en la Primera Circunscripción, y en las Séptima y Novena Circunscripciones Judiciales. Acuerdo N° 13, de fecha 24 de abril de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 17711/P/15, leído por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.

Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Raúl Ramírez sea designado como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Cosquín.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-10-

Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 19361/P/16, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 24 de agosto de 2016.

Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 19361/P/16, pliego solicitado por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para que el abogado Leonardo Miatello sea designado como Juez de Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa María.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 19361/P/16, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Leonardo Miatello, DNI 27.337.143, como Juez en el Juzgado de Conciliación perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Villa María, Acuerdo 20, de fecha 9 de mayo de 2016, contando con despacho favorable por parte de la comisión.

El abogado Miatello resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura para Juez de Conciliación para el interior provincial.

El postulante egresó de la Universidad de Belgrano en el año 2003.

En cuanto a estudios y actividades de posgraduación se encuentra cursando la especialización en Derecho Laboral, dictado por la Universidad Nacional de Córdoba.

Aprobó el curso de Ley de Riesgos del Trabajo, dictado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, y la diplomatura sobre Estrategia Probatoria y Éxito Procesal, dictado por la Secretaría de Postgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros.

Participó periódicamente de múltiples cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos de diferentes temáticas, en general referidas a cuestiones de materia laboral.

En el año 2013 el doctor Miatello comienza a ejercer la profesión de abogado, matriculándose en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

En el año 2005 ingresa al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, desempeñándose como meritorio en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad de Río Cuarto.

Desde el año 2013 hasta la fecha se desempeña como Prosecretario Letrado en la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Río Cuarto.

Podemos mencionar también que el doctor Miatello se desempeñó en la docencia universitaria en la cátedra de Derecho Procesal Civil desde el mes de diciembre de 2012 al mes de julio de 2013, y desde el año 2013 a la actualidad se desempeña como ayudante con dedicación simple en la cátedra de Derecho Privado I, Daños, y en la cátedra de Derecho Procesal Civil, ambos de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad del doctor Miatello están por demás acreditadas.

Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Leonardo Miatello como juez del Juzgado de Conciliación perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa María.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia de las dos abstenciones aprobadas para los dos bloques que las solicitaron en el tratamiento del anterior proyecto.

Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminado acerca del pliego 19361/P/16:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Leonardo Miatello, DNI 27.337.143 como Juez del Juzgado de Conciliación perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María., Acuerdo Nº 20, de fecha 9 de mayo de 2016.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente leído por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.

Queda prestado el acuerdo para que el abogado Leonardo Miatello sea designado Juez de Conciliación en la ciudad de Villa María.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-11-

Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18951/E/16, que se compatibiliza con el proyecto 19079/L/16. Los mismos cuentan con despacho de comisión. A continuación será leída la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):

Córdoba, 24 de agosto de 2016.

Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, de los expedientes compatibilizados 18951/E/16 y 19079/L/16, proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo provincial y los legisladores El Sukaria, Serafín, Tinti, Quinteros, Montero, Massare, Caffaratti, Nicolás, Juez y Oviedo, respectivamente, modificando los artículos 268 y 281 e incorporando los artículos 281 bis y 281 ter a la Ley 8123, Código Procesal Penal, referidos a la situación de libertad a quien se le atribuya participación en un delito a prisión preventiva, peligro de fuga del imputado y peligro de entorpecimiento.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

Tiene la palabra la legisladora Papa.

Sra. Papa.- Señor presidente: nuevamente este reciento es escenario de debates enriquecedores que, finalmente, se ven traducidos en concretas acciones de Gobierno que mejoran y modifican la vida de muchos ciudadanos.

Hace aproximadamente dos meses, desde aquí, como presidenta de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, me tocaba fundamentar la decisión de la adhesión a la Ley Nacional 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ámbito en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Este proyecto fue aprobado el 1º de junio con el voto positivo de la mayoría de los bloques.

Ya en dicha oportunidad afirmábamos que la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, cualquiera sea su forma, es una cuestión de Estado, y estamos convencidos de que para lograrlo habrá que realizar esfuerzos.

Señales de ese esfuerzo -a modo enunciativo- son: la creación del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, que cuenta con una brigada de protección de expertos; el programa un Nuevo Rumbo; la Red de Universidades por la no violencia; la Comisión Consultiva de Expertos; la creación de unidades judiciales y fiscalías especializadas en la materia de violencia; la Oficina de la Mujer en la órbita del Tribunal Superior de Justicia; el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género; el Programa de Intervención de Agresores y, por supuesto, el incremento de la partida presupuestaria en casi un 130 por ciento, destinando este año 63 millones para el abordaje de dicha problemática.

El objetivo es claro: llevar adelante una política más agresiva orientada a la asistencia integral para las mujeres víctimas de violencia, que incluya el fortalecimiento personal y la independencia económica, en busca de una salida real a esta compleja situación y no meros paliativos aislados.

Y es así como, en este marcado camino, que aúna esfuerzos para abordar tan compleja problemática, hoy nos encontramos debatiendo el proyecto 18951/E/16 propiciando la modificación del artículo 281 y la incorporación de los artículo 281 bis y ter de la Ley 8123, Código de Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, referidos a prisión preventiva, fuga y peligro de entorpecimiento.

El proyecto de referencia tiene por objeto modificar la regulación del Instituto Procesal de la Prisión Preventiva y, en materia de violencia, esclarecer los hechos tendientes a proteger a las víctimas y testigos, asegurando el desarrollo del proceso, generando prontas y eficaces respuestas para víctimas y familiares.

Como miembro de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, haré específico hincapié en aquellas modificaciones cuya relación se encuentra directamente vinculada a la lucha contra la violencia de género.

En tal sentido, la reforma que se propone ha tenido particularmente en cuenta las dificultades que estos casos presentan, y la necesidad de proteger a las víctimas y testigos con el objeto de resguardar y asegurar los fines del proceso.

De esta manera se procura evitar la impunidad de los autores en el entendimiento de que es la forma correcta de seguir avanzando hacia el objetivo de generar una justicia que brinde respuestas prontas y de calidad para las víctimas de este fenómeno social.

La redacción del nuevo artículo 281 prevé también la incorporación del artículo 281 ter con cuatro incisos, dedicándole el inciso 3) exclusivamente a esta temática, inciso que quedará redactado de la siguiente manera: "Peligro de entorpecimiento; para decidir acerca del peligro procesal de entorpecimiento de la investigación se podrá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la sospecha de que el imputado: Inciso 3): influirá para que la víctima, testigos o peritos de hechos que tengan vinculación con situaciones de violencia de género se comporten de manera renuente en sede judicial, entorpeciendo su participación y cooperación en el proceso. Este extremo, entre otros indicios, podrá inferirse de la escada de violencia, entendiendo por tal la reiteración de hechos violentos en el mismo proceso o en otro proceso anterior o que se encuentre en trámite y del temor que el estado de libertad del imputado pueda infundir sobre la víctima y/o testigos. En dichos supuestos se deberán tener presentes los derechos reconocidos, los deberes impuestos al Estado y las directrices que forman parte de las convenciones y tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional".

Este inciso aborda específicamente la problemática de la violencia de género, lo que no significa que excluye las demás condiciones especificadas en el resto de los incisos, tanto en artículo 281 bis como en los restantes.

De su redacción queda a las claras que el principal objetivo es la protección no sólo de la víctima sino también de testigos y peritos que por el accionar del agresor vean coartada su voluntad de cooperación o comportamiento y que con ello se pueda entorpecer o desvirtuar el resultado final del proceso.

En la segunda parte de la redacción del artículo de referencia, de forma enunciativa y no taxativa, se habla del temor que el agresor pueda infundir en la víctima y/o testigos; ello es así porque en la mayoría de los casos de violencia existe una relación previa entre la víctima y el agresor, colocando a la primera en una especial situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el artículo habla de la escalada de violencia, es decir, la reiteración de hechos violentos hacia la víctima sin importar el momento de la comisión de los hechos, herramientas que le facilitarán al judiciable la toma de medidas preventivas para casos de violencia.

Asimismo, en consonancia con la modificación propuesta, nos parecía acertado dar tratamiento al proyecto de ley 19079/L/16, iniciado por los legisladores El Sukaria, Serafín, Tinti, Quinteros, Montero, Caffaratti, Juez y Oviedo, por el cual se propone modificar el artículo 268 del mismo Código Procesal Penal, referido a la situación de libertad de quien se le atribuya participación en un delito.

La reforma que se propicia pretende incorporar al último párrafo de dicho artículo la posibilidad de que los magistrados puedan imponer la obligación de cumplir con el uso de dispositivos electrónicos en casos de violencia de género a toda persona a quien se le atribuya la participación en un delito como condición para mantener su situación de libertad. Esto es debido a que una de las medidas más eficaces para prevenir los femicidios o episodios graves de violencia de género consiste, justamente, en el uso de dispositivos electrónicos. A modo de ejemplo, queremos resaltar que con el botón antipánico, dispositivo implementado durante la pasada gestión, se registraron en la ciudad de Córdoba más de 50 detenciones de agresores o de presuntos agresores.

Acciones y más acciones, programas en ejecución, proyectos de ley y trabajo interdisciplinario muestran contundentemente la decisión del Estado provincial de abordar esta temática con diversas aristas y distintas connotaciones de manera seria, contundente y eficaz.

Desde la Comisión hemos propiciado el diálogo y la interacción con distintos actores sociales estrechamente vinculados a la problemática; hemos recibido a organizaciones, profesionales y familiares de víctimas, cuyos relatos han aportado datos concretos. Uno de los reclamos más vehemente ha sido la violación, por parte de los agresores, de las órdenes judiciales, la destrucción de pruebas en casos de violencia, la intimidación y el poder que ejercen sobre las víctimas y sus familiares y, sobre todo, la reincidencia en los hechos violentos.

Por ello, estamos convencidos de que nos encontramos ante un proyecto que dará solución a una parte de este conflicto tan amplio y tan complejo que venimos abordando.

Aún queda mucho por hacer, y desde la comisión no sólo venimos evaluando los proyectos presentados por los distintos bloques sino que escuchamos a los actores sociales involucrados para visualizar resultados en este largo pero hasta ahora fructífero camino hacia la lucha para erradicar, prevenir y sancionar la violencia de género.

Señor presidente: las consideraciones anteriormente vertidas son más que suficientes como para que el proyecto en tratamiento tenga sanción por parte de este Cuerpo, razón por la cual adelanto el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba y solicito el acompañamiento de los demás bloques legislativos en el mismo sentido.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a apoyar el proyecto de ley en cuestión.

En particular, me voy a referir a las modificaciones planteadas al artículo 268 del Código Procesal Penal, y lo hago con la convicción de que le estamos otorgando a la Justicia un instrumento más en la lucha contra la violencia de género.

Esta propuesta, como bien lo ha expresado la legisladora preopinante, ha surgido no sólo como resultado del debate entre los miembros de la comisión y de los distintos legisladores, sino también de haber escuchado relatos de las víctimas, familiares y asociaciones, las cuales han expresado que muchas muertes o situaciones de violencia podrían haberse evitado de haber existido con anterioridad este recurso.

Por supuesto que nos hemos preguntado por las garantías del agresor, pero no podemos perder de vista que debe primar la defensa de la vida; de los trágicos casos que han sucedido este año y los anteriores, podemos observar que es normal que los agresores violen su orden judicial de restricción y terminen perpetrando el crimen.

Sin embargo, como lo venimos sosteniendo, debemos ser conscientes de que estamos frente a medidas aisladas, que no se plantea una solución ni definitiva ni integral. Es necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad frente a este flagelo y aplique una

verdadera política pública con presupuesto suficiente, integral y basada, principalmente, en la prevención, en la investigación y que la misma sea duradera en el tiempo.

Por todo lo expuesto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar el presente proyecto.

Gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos vamos a acompañar el despacho de las comisiones que reforma los artículos 268, 281 e incorpora los artículos 281 bis y 281 ter; luego, la legisladora Chiappello va a hacer algunas consideraciones específicamente sobre los artículos 281 y 281 bis.

El acompañamiento de este proyecto no puede, bajo ninguna circunstancia, soslayar la deuda impresionante que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba en materia de violencia de género.

Escuchaba atentamente a la presidenta de la comisión, y quiero hacer un paréntesis y reconocer a los presidentes de ambas comisiones por la posibilidad de debate y aporte que hubo en relación a este proyecto, lo cual permitió que se enriqueciera y pudiéramos llegar a un despacho en común, sin embargo, los números hablan y si bien no descreo de su palabra hay algo que no cierra.

La cuenta de ejecución presupuestaria recientemente elevada a esta Legislatura y que figura en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba dice, por ejemplo, que este Gobierno, que se jacta de haber invertido tanto en materia de violencia de género, en el Programa 684, Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, Cuenta Especial, que tenía asignados 2 millones de pesos, ¿sabe cuánto ejecutó? Cero peso; del Programa 685, de Prevención, Detección Temprana, Atención y Erradicación de la Violencia Familiar, que tenía un presupuesto asignado de 8.190.000 pesos, ejecutó tan sólo el 28 por ciento, algo más de 2 millones de pesos, transcurridos 6 meses de gestión.

Y este es el más grave, porque los aumentos que se dice que hubo a nivel presupuestario es cierto que figuran en el Presupuesto, el tema es que muchas veces hemos manifestado que el Presupuesto termina siendo un dibujo y que, en realidad, no refleja dónde pone el dinero la Provincia de Córdoba.

El Programa 689, de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, el más grande de los programas en este sentido, tiene un presupuesto asignado –que se jactan de haber incrementado- de 24.670.000 pesos, es mucho, señor presidente, pero, ¿sabe cuánto se ejecutó de ese monto en los primeros seis meses de gobierno? Cero pesos, el cero por ciento está ejecutado.

Entonces, lo primero que hay que decir es que falta un montón, está claro, porque si no los números serían otros, y los números dicen que los programas no se están ejecutando, al mismo tiempo que hay sobre ejecuciones en las partidas referidas a publicidad, que hay sobre ejecuciones en las agencias del Estado, etcétera.

En cuanto al artículo 281 ter, concretamente, la discusión en la comisión estuvo centrada en si era necesario o no este artículo; si la Justicia hoy tiene las facultades para dictar la prisión preventiva a un agresor que incumple una orden de restricción. La verdad sea dicha: sí las tiene y si no las ha ejercido, también ha sido responsabilidad de la Justicia. Así como nos referimos a las responsabilidades que tiene el Poder Ejecutivo en materia de prevención y asistencia, también hay que decirlo con todas las letras: que la Justicia de Córdoba no mire hacia otro lado porque tiene una deuda impresionante, desde el mal funcionamiento de algunas unidades judiciales; desde el no dictado de las prisiones preventivas cuando se necesitaban o, por el contrario, el haberlas dictado en casos en que no había ningún indicio de entorpecimiento del proceso también responsabiliza a la Justicia de Córdoba en relación a su accionar.

En este sentido, nos parece que esta reforma es un granito de arena y, en realidad, más que nada es un llamado de atención hacia el Poder Judicial para decir que no miren para otro lado y si en verdad tanta falta les hacía este artículo, ahí lo tienen, y esperamos que a partir de ahora, cuando se deban dictar las prisiones preventivas, se tenga en cuenta lo que este artículo está regulando y se dicten todos los pasos de acuerdo a lo establecido en la ley.

En relación al artículo 268, seguramente la legisladora El Sukaria se referirá a él; en realidad, se trata de una adecuación de lo que entendemos es una política que vendrá del Gobierno nacional y que Córdoba será una de las provincias en donde se va a implementar.

Dicho esto, adelantamos y ratificamos el voto positivo al proyecto en tratamiento.

Nada más.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: venimos a presentar, junto con los coautores y cofirmantes del proyecto en tratamiento, la reforma del artículo 268 del Código de Procedimiento de la Provincia de Córdoba para dar mayor prevención en el marco del proceso ante la situación de libertad de un procesado, sobre todo teniendo en cuenta los delitos de violencia de género.

Las normativas se implementan con una nueva mirada y, sobre todo, en el núcleo del proyecto está salvar el bien jurídico protegido más importante que tiene cualquier legislación, que es la vida humana. Para salvar la vida humana es necesario utilizar los adelantos tecnológicos y que los procesos judiciales, jurídicos y administrativos se adecuen a las necesidades.

El 70 por ciento de los casos de femicidio se da dentro del marco de un proceso ya iniciado. Si tenemos en cuenta estas estadísticas, que durante este 2016...

-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sra. El Sukaria.- Se ve que sigue siendo un tema de menor importancia para los legisladores, pero nosotros lo consideramos muy importante porque estamos hablando de vidas humanas.

En definitiva, en lo que va del año, 12 mujeres fallecieron, y en 2015, 15 mujeres; es decir, en 8 meses ya casi estamos en la misma estadística del año pasado.

En verdad, es triste pensar que en Córdoba el 49,7 por ciento del origen de las muertes y femicidios son en el ámbito de la vida familiar, es decir, en manos de parejas, y el 40 por ciento en manos de ex parejas. Y lo triste es que la Policía, los jueces y los fiscales siguen considerando a los femicidios como problemas de entrecasa. Si seguimos con este concepto de "problemas de entrecasa", con presupuestos sin ejecutar y tenemos hechos de una muerte cada mes, el acceso a la Justicia de las mujeres no está asegurado en la Provincia de Córdoba.

Por eso, en el ámbito de esta comisión hemos discutido mucho y creemos que esto recién es un puntapié inicial, pero en cuanto a política pública Córdoba está retrasada en lo que necesita una provincia para manejar una problemática social de semejante envergadura.

No quiero dejar de agradecer a todos los coautores y cofirmantes y al equipo que nos ayudó, porque entendieron que la violencia de género supera cualquier ideología y que es un tema al que hay que darle gestión y acción, y dejar de discurrir y de inventar programas que no son ejecutados.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Serafín.

Sra. Serafín.- Señor presidente: este bloque del Frente Cívico desde ya adelanta el acompañamiento a los proyectos presentados en mérito, principalmente, al trabajo de compatibilización que se hizo de éstos, como resultado del trabajo conjunto en comisión y que incluye la modificación del artículo 268 de la Ley 8123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, en cuanto se refiere específicamente, en su último párrafo, a las situaciones de violencia de género y la posibilidad que tendrá la Justicia de contar con nuevas herramientas para prevenir nuevos o posibles hechos.

Lo mismo ocurre con la modificación al artículo 281 y la incorporación de los artículos 281 bis y ter que, aun sin recoger la totalidad de los aportes legislativos que se hicieron, es innegable que la nueva redacción refleja el resultado de un trabajo colectivo de legisladores y expresa satisfactoriamente los aportes mejor consensuados. Pero -y siempre hay un "pero"- nuestro bloque no deja de advertir que, sin perjuicio de esta mejor y más clara redacción en las normas, las modificaciones están llegando tarde; que este paso no libera de la responsabilidad de las demoras que las cuestiones de violencia vienen adoleciendo, y si no, el que piense distinto puede preguntar a cualquiera de los familiares de estas 12 víctimas que tenemos solamente en este año 2016.

Por todo eso, instamos al Gobierno a que continuemos trabajando para que una política pública de lucha, prevención y erradicación de la violencia sea posible y real, con gestos concretos, con asignaciones presupuestarias y ejecuciones presupuestarias reales y no simples debates discursivos, e instamos a trabajar por esto en comisión con carácter de urgente el resto de proyectos presentados por los distintos bloques legislativos, que aún siguen esperando ser tratados y resueltos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores nos vamos a oponer al proyecto presentado en esta Legislatura, porque consideramos que forma parte de la batería de medias tintas que se intenta aplicar para dar respuesta a un problema que es sumamente alarmante.

Como informaba la legisladora Papa en la Comisión de Equidad y Género –comisión de la que formo parte-, hemos recibido a distintas mujeres víctimas de violencia de género y a familiares –como Amaro Acosta o Jael Funes-, y pudimos escuchar cuáles eran las situaciones por las cuales los hechos de violencia se generaban de manera sistemática, muchos de los cuales terminaban en casos de femicidio.

También hemos podido escuchar, y desde el Frente de Izquierda estamos orgullosos no sólo de escuchar sino también de haber participado de la convocatoria y de las grandes movilizaciones de “Ni Una Menos”, y el reclamo de las mujeres organizadas fue sumamente claro: las mujeres exigen la emergencia en cuestión de género ya, el aumento de presupuesto, la creación de los refugios para que puedan acceder de manera inmediata a romper esos vínculos violentos que la sociedad machista y el Estado están imponiendo a las mujeres, porque la mujer en situación de violencia está obligada a sostener ese tipo de relación mientras no puede irse de su casa, porque en las relaciones domésticas se encuentra esa relación violenta con el hombre machista.

Las mujeres exigen el aumento de presupuesto porque aquí se está gastando más dinero en la creación de los hoteles, en las publicidades o en los gastos que ningún sentido tienen; se está gastando más en todo eso que en los programas tienen que ver con la violencia de género.

Son muy pocas las unidades judiciales dotadas de personal capacitado en violencia de género; se han unificado las Secretarías de Violencia y sólo hay un refugio en la ciudad, con todos amontonados, muy cerca de la Terminal, donde las mujeres tienen que venir en horarios de la mañana, luego son reubicadas y no tienen seguimiento, porque los legisladores tienen que conocer que se han fragmentado los equipos interdisciplinarios para poder seguir los casos de violencia de género.

Si bien la Secretaría de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia se encuentra creada, la Ley de Violencia Familiar –que sigue vigente en esta Provincia y que se ha aprobado hace muchísimos años-, sigue sin crear el observatorio, el registro y las comisiones de seguimiento. Todo eso ha hecho que esta Legislatura, desde 2013 hasta la fecha, no haya cumplido otro rol que reunir las estadísticas de los femicidios, porque en 2013 fueron 28 las mujeres asesinadas; en 2014, 15 mujeres asesinadas; en 2015 fueron, y en lo que va de este año son 12 las mujeres asesinadas.

Son tan parciales las modificaciones que se quiere hacer al Código Procesal Penal de la Provincia que solamente vamos a poder trabajar sobre quienes ya están imputados, cuando la violencia ya ha comenzado y ha llevado a la mujer a la denuncia, inclusive a muchos casos de denuncias. Pero no solamente eso, las modificaciones son tan parciales que no resolverán ninguno de los problemas de violencia de género en nuestra Provincia, porque la Justicia ya tiene las herramientas necesarias para poder dictar la prisión preventiva cuando sea necesario.

El Tribunal Superior de Justicia ya ha afirmado que es delito violar las restricciones cuando están dictadas por violencia de género, y aunque muchas veces se ha hecho, llega tarde también, pero no por el problema de no tener herramientas escritas sino porque la Justicia misma está conformada y constituida como una institución machista, este es el motivo por el cual el caso de la compañera Acosta todavía sigue sin declararse como femicidio, porque consideran que las situaciones de violencia hacia las mujeres son normales y los procesos judiciales tardan muchísimo tiempo para poder llevarse adelante.

Toda esta situación hace que sean medidas parciales e insuficientes. Por eso, desde el Frente de Izquierda no los vamos a acompañar, no solamente por ser insuficientes sino que consideramos que la prisión preventiva debe ser una excepción y estas herramientas que actualmente se están tipificando les darán mayores posibilidades a jueces y fiscales de hacer extensiva la prisión preventiva a distintos casos de delito.

La Justicia ya tiene las facultades, lo que hace falta es generar instituciones en donde las organizaciones de mujeres gestionen cada uno de los pasos que sean necesarios para evitar la violencia de género. Para eso necesitamos presupuesto, dotar democráticamente la constitución de estos organismos y que no sea sólo la Justicia la que, entre cuatro paredes, resuelva los problemas de violencia de género.

Entonces, exigimos el aumento de presupuesto, la creación de los refugios y todo lo que ya hemos presentado, como así también la inmediata reglamentación y la incorporación de los procedimientos legales de la Ley Nacional contra la Violencia de Género que, como

otra medida parcial más, esta Legislatura aprobó. Aprobamos la adhesión a la ley nacional, pero no a los procedimientos; es por eso que estamos aplicando parches a los procedimientos penales para intentar quedar mejor ante los reclamos de las mujeres.

Las mujeres seguirán movilizadas para exigir a los gobiernos de turno la salida de fondo. Ellas contarán con el apoyo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, no el presente proyecto, porque son más medias tintas que no resuelven el problema.

Nada más.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adelanto el voto positivo en general al proyecto, a la par que felicito a todas las personas y legisladores que han trabajado con mucha responsabilidad por lograr un proyecto unificado y de consenso.

Mi oposición es tan solo a la redacción del inciso 3º del artículo 281 ter. Como vengo diciendo en esta Cámara desde hace varios años, los problemas de las familias se toman en conjunto. El problema de la violencia intrafamiliar o los problemas que aquí se han referido deben ser tomados en su conjunto, y el derecho debe reflejar esta problemática en su conjunto.

No debe hablarse estrictamente de violencia de género sino de violencia familiar porque, por ejemplo, en este caso puntual quedan sin la protección tuitiva especial que prevé el inciso 3º del artículo 281 ter con una protección específica los niños, que también sufren, lamentablemente, por las cosas que están pasando en nuestro país están sufriendo un grave menoscabo en el seno de sus relaciones más profundas.

Dejando de lado esa salvedad, reitero que felicito a todos los que han trabajado y han puesto todo su esfuerzo en lograr un proyecto de consenso.

Pero también, haciéndome eco de los planteos que se han hecho aquí a las políticas activas por parte del Estado provincial para apoyar estas situaciones puntuales que hacen a la violencia contra la mujer y toda la subejecución de partidas presupuestarias que estamos viendo semanalmente en este tema, creo un decreto firmado ayer por el Presidente de la República echa luz sobre la verdad de Córdoba; ese decreto le otorga a Córdoba una ayuda financiera, y dice: "Resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa la Provincia de Córdoba". Este es un tema de mucha reflexión, señor presidente.

Nada más.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.

Adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento. En general, no entendemos que una salida de mayor punición y de fortalecimiento del aparato carcelario sea la salida al problema de la violencia machista.

Pido disculpa al Pleno, pero acercaré el resto de los argumentos por Secretaría.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Serán incorporados los argumentos, legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Chiappello.

Sra. Chiappello.- Señor presidente: para continuar con lo que decía mi compañera, la legisladora Montero, reitero el voto afirmativo de nuestra bancada y voy a hacer unas consideraciones en cuanto a la reforma del artículo 281.

Consideramos que todas las reformas del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba que se llevan adelante deben ser producto de debates técnicamente fundados y socialmente comprometidos.

Creo que esta reforma ha tenido mucho debate, a lo mejor no ha tenido las incorporaciones que a nosotros nos hubiese gustado, pero entendemos que ha sido debatida.

Compartimos que las garantías individuales están establecidas en nuestra Constitución Nacional con el objetivo de proteger de manera integral a las víctimas, sin desconocer los derechos que asisten a los ciudadanos sometidos al proceso penal. En este caso, la reforma de la prisión preventiva para un sector de nuestra jurisprudencia funciona como una práctica o como una herramienta efectiva para el control del delito, pero nosotros

compartimos el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera que la misma debe ser de carácter excepcional.

También consideramos que se debe tomar conciencia de las limitaciones de nuestro sistema y, en tal sentido, hay que dotar al Poder Judicial de mayor presupuesto y promover una constante capacitación de los recursos humanos, para poder comenzar a trabajar en la implementación de mecanismos ágiles y eficientes para el control y dictado de la prisión preventiva. De ese modo, se evitará adelantar las resoluciones de las causas con sujetos privados de la libertad y que la prisión preventiva no se transforme en un anticipo de penas a personas que por imperativo constitucional deben ser consideradas inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario.

En cuanto a la violencia de género –más allá de que mi compañera lo ha dicho todo-, el proyecto presentado específicamente incorpora uno de los incisos propuestos, y entendemos que, si bien están buscando herramientas para atender esta problemática social que se ha constituido en un verdadero flagelo, la misma requiere de un abordaje profundo e integral que vaya más allá de lo estrictamente punitivo, incluyendo mecanismos de control no solamente represivos.

Una sociedad libre de violencia contra las mujeres debe poner en primer plano al Estado con políticas públicas transversales tendientes a la prevención, al acompañamiento y a la sanción de este tipo de delitos.

Entendemos una batería de leyes y programas y secretarías específicas sin presupuesto suficiente y sin capacitación adecuada es una cáscara vacía que no resuelve esta emergencia social que ha sido trabajosamente instalada en la agenda pública.

Se deberán repensar las acciones u omisiones del propio Estado, que termina generando violencia institucional. Este tipo de violencia no podrá ser erradicada si no se tornan exigibles aquellos programas de capacitación con un enfoque integral de género dirigido a los integrantes del Poder Judicial y de la Policía, ya que la cultura patriarcal atraviesa a los magistrados y auxiliares de la administración de justicia, por lo que se requiere una transformación comprometida y estructural para que la violencia de género e intrafamiliar reciba un tratamiento jurídico adecuado y, sobre todo, que llegue a tiempo.

Muchas gracias. Adelantamos nuestro voto positivo.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: solamente es para hacer un par de agregados a lo que ya dijo el legislador Peressini.

Escuchando atentamente a los que han defendido al proyecto, vemos que se ha planteado una serie de cuestiones que indican que el problema es que estamos fortaleciendo una estructura judicial, una forma de represión de un hecho; solamente eso.

Como esto fue presentado en nombre de la lucha contra la violencia hacia la mujer, temo que sea una suerte de “caballo de Troya”, porque luego esto puede ser aplicado para muchas cosas más.

Tanta precisión y tanto esfuerzo por tener esa precisión, cuando no se hace ningún otro tipo de esfuerzo, cuando no podemos lograr que se discuta aunque sea uno solo de las decenas de proyectos que hemos presentado, cuando no podemos lograr que se contesten pedidos de informes sobre el punto, cuando a pesar de haber tenido una sesión especial para abordar el tema estamos concentrados solamente en el aspecto jurídico para ver qué hacemos con el victimario, me da la impresión –tengo la certeza- de que no solamente no se va a solucionar lo que se dice que se va a solucionar sino que seguimos abundando en un solo camino, el de tratar de ocultar las evidencias de una crisis social enorme -que se expresa en la violencia familiar, en la violencia hacia la mujer- y la responsabilidad que el Estado y los gobiernos tienen en la generación de esa violencia, por las condiciones que crean para que esa violencia se desarrolle y por no intervenir y tratar de mitigar las terribles consecuencias que esa violencia provoca en la población.

Por eso, señor presidente, no corresponde que acompañemos este proyecto, bajo ningún punto de vista; porque, además de no solucionar el problema, le estaríamos indicando a la población que lo único que se le ocurre a esta Legislatura es ver cómo aceita los mecanismos de represión de los hechos, en lugar de dedicarse a solucionarlos.

Nada más. Gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Font.

Sr. Font.- Le pido ahora la palabra, señor presidente, porque sé que la mayoría se asigna el derecho de cierre del debate, y no quiero provocar un problema.

Simplemente, quiero ratificar la posición expresada por la miembro informante de mi bloque, en cuanto al apoyo a los proyectos en tratamiento, pero con un par de digresiones.

Primero, tenemos la sensación de que esta reforma es un deslinde de responsabilidad institucional propia del Ejecutivo. Lo que esta reforma busca es trasladar una carga del Poder Ejecutivo provincial al Poder Judicial. La responsabilidad a la que hago referencia es la de prevenir el delito; me parece que en este caso la función preventiva está siendo trasladada al Poder Judicial.

La segunda digresión es que se ha trabajado, evidentemente, no digo al límite pero muy cerca de tocar el sagrado principio de la libertad de las personas, por lo cual es mi obligación decir que estas modificaciones que, sin dudas, responden a un requerimiento social al cual, como legisladores, debemos atender, merecen un tratamiento integral. Por eso, solicitamos el tratamiento urgente del proyecto -que se encuentra en esta Legislatura- en el que se da intervención a los jueces de control para el tratamiento, a través de una audiencia actuada donde se establezcan los principios de la prisión preventiva.

Con estas observaciones ratifico, en nombre de mi bloque, el acompañamiento al presente proyecto.

Gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Julián López.

Sr. López (J.).- Gracias, señor presidente.

Como lo han anticipado muchos legisladores preopinantes, el proyecto que se encuentra en tratamiento tiene por objeto proponer la modificación del artículo 281 de la Ley 8123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, y la incorporación de los artículos 281 bis y 281 ter, que regulan el instituto de la prisión preventiva en el proceso penal cordobés.

Uno de los motivos primordiales de este proyecto es establecer directrices que rijan, a futuro, la aplicación de la peligrosidad procesal, otorgando a los magistrados pautas orientadoras tendientes a facilitar el ejercicio de la jurisdicción en aquellos casos que versen sobre la libertad de ciudadanos sometidos a proceso, todo de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia.

Decimos que son tres los objetivos que tornan necesaria la presente reforma. En primer lugar, adaptar la norma procesal a los lineamientos que surgen de la jurisprudencia sentada por la Corte, más concretamente en los autos Loyo Fraire, Recurso de Hecho, causa 3 de 2013 con fecha 6 de marzo de 2014, que si bien en parte se efectuó una adaptación en la anterior reforma que se realizó en esta Legislatura en el año 2014, este proyecto tiene mayores prerrogativas para la prisión preventiva, es más aclaratoria al desdoblarse el instituto en tres artículos y se brinda una mejor casuística. Además, recepta el tema de la violencia de género a la que nos referiremos más adelante.

En segundo término, esta reforma pretende reorganizar la actual redacción del artículo 281 tendiente a lograr una regulación sistemática del instituto de la prisión preventiva diferenciando, con la incorporación de dos nuevos artículos, los criterios de riesgo procesal de fuga y de peligro de entorpecimiento de la investigación. Los dos objetivos antes mencionados son de tipo instrumentales, sin embargo, quizás el objetivo principal de la presente reforma es de tipo específico que consiste en, nada más y nada menos, que desarrollar medidas específicas para los casos de violencia de género y violencia familiar como continuidad de otras políticas públicas tomadas.

Podemos mencionar que esta reforma tiene en mira, fundamentalmente, la complejidad que representa la investigación y el esclarecimiento de hechos de violencia de género y de violencia familiar respecto a un flagelo en el que se torna necesario desarrollar medidas específicas tendientes a tutelar a ese segmento de la conflictividad penal.

Para el Gobierno provincial la lucha para la erradicación de la violencia de género -situación que reconocemos que existe y a la cual tenemos que seguir sumando esfuerzos- ha sido abordada desde un escenario sistemático mediante la sanción de leyes específicas y la implementación de medidas y programas tendientes a garantizar la seguridad de las víctimas. Tiene que ver con el incremento de presupuesto, con la creación de la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y la Trata de Personas, con la ejecución de planes y programas para dar soluciones específicas, inmediatas y operativas a un problema que es la larga data; tiene que ver con el Decreto 174/16, por el cual se puso en marcha el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, que brinda todo tipo de servicios para personas víctimas de violencia y trata que incluye una brigada de protección de expertos civiles que trabaja en conexión con la Policía ante denuncias telefónicas o por el

accionamiento del botón antipánico; tiene que ver con el Decreto 175/16, que dispone la creación del programa Un Nuevo Rumbo con el objetivo de propiciar el empoderamiento e inclusión social de mujeres víctimas de violencia familiar, delitos contra la integridad sexual y trata de personas cuyo objetivo es lograr la independencia y autonomía mediante el otorgamiento de contribuciones económicas destinadas tanto al sustento como a la residencia.

Paralelamente, también desde el Poder Judicial provincial fueron creadas unidades judiciales y fiscalías especializadas en la materia, al tiempo que se puso en marcha la Oficina de la Mujer en la órbita del Tribunal Superior de Justicia.

Es de destacar, además, la reciente aprobación por parte de esta Legislatura provincial del proyecto de adhesión a la Ley Nacional 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

Nos encontramos en situación de afirmar que este Gobierno conoce la existencia de una problemática, tiene la preocupación por la situación y, sobre todo, el deseo de ocuparse y generar de manera continua mayor cantidad de acciones que acompañen a la protección integral de la mujer y sus derechos.

Este proyecto propone una sistematización en la regulación de la prisión preventiva.

Los artículos 281 bis y 281 ter vienen a regular, en forma específica, el peligro procesal a través de dos tipologías reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia, que son el peligro de fuga y el entorpecimiento.

En el artículo 281, en el primer enunciado, se mantienen los requisitos generales que hacen procedente la privación cautelar de la libertad, estableciendo estas dos tipologías. También se deja expresamente sentado que los indicios de peligro procesal deben ser acreditados en el caso concreto, impidiendo de esta manera que se pueda echar mano a enunciaciones abstractas de peligro que no se vinculen al hecho concreto.

Es decir que el Código Procesal se vuelve receptivo de los lineamientos de los máximos Tribunales nacionales e internacionales y, paralelamente, la valoración de esa prueba indiciaria necesariamente se sujeta a las reglas de la sana crítica racional, según la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia vigente.

El artículo 281 bis incorpora, a través de cuatro incisos, una enumeración no taxativa de indicios, de los cuales se puede inferir la existencia del peligro de fuga del imputado.

El último inciso del dispositivo propuesto merece una explicación especial, dado que su redacción se reitera también al final del dispositivo que regula el peligro procesal de entorpecimiento, es decir el artículo 281 ter, inciso 4).

Ambos dispositivos reenvían a las condiciones del artículo 268 del Código Procesal Penal, pues es ésta la norma que autoriza a los fiscales a imponer condiciones tendientes a neutralizar tanto el peligro de fuga como el entorpecimiento de la investigación.

El artículo 268, con la modificación que también se propone y que fue anteriormente mencionada, hace posible el principio de escalonamiento de las medidas de coerción que informa toda nuestra legislación procesal y que impone el deber de garantizar, a los fines del proceso, con la medida que menos restrinja el derecho del imputado, que todavía sigue amparado por un estado jurídico de inocencia.

Del otro lado, los fiscales deben contar también con herramientas efectivas para garantizar el éxito del proceso, y es por eso que se incluye expresamente, como indicador de riesgo procesal, el incumplimiento de las condiciones de coerción o de las medidas de coerción menos graves. Si las medidas menos graves impuestas no son cumplimentadas queda habilitado el uso de la medida de coerción más grave.

Por su parte, el artículo 281 ter establece que se podrán tener en cuenta indicios que justifiquen la sospecha de que el imputado, por sí o por otros, entorpecerá la investigación. Y es aquí, quizás, que esa reforma, que tiene un objetivo de tipo específico –al que nos referíamos al principio y que consiste en tratar la problemática de la violencia de género–, adquiere sentido. Porque esta protección se ve reflejada en el hecho de que sea abarcativa no sólo de la víctima sino también de peritos y testigos, y también se ve reflejada en la diversidad de hipótesis que permite incluir, permitiendo abarcar todas las acciones del agresor tendientes a evitar o frustrar la participación y cooperación en el proceso de la víctima, de los testigos y/o de los peritos.

De esta manera, los operadores jurídicos encargados de valorar el riesgo procesal, podrán y deberán tomar en cuenta los comportamientos del imputado que sean indicativos de la finalidad de entorpecer el proceso. Estos indicativos específicos son, por ejemplo, el temor que el estado de libertad del imputado pueda infundir sobre la víctima y/o testigos y, en este caso, hay que tomar esencialmente en cuenta que en la mayoría de los casos existe entre la víctima y el imputado un vínculo previo, y ello coloca a ésta en una posición de

debilidad en cuanto a sostener una efectiva colaboración en el proceso. Lo mismo sucede cuando los testigos pertenecen al ámbito intrafamiliar o son cercanos al imputado.

Otro indicador es la escalada de violencia evidenciada por la reiteración de hechos violentos en el mismo proceso, en procesos anteriores o que se encuentren en trámite, y esto va a permitir valorar el riesgo procesal analizando la conflictiva de violencia de modo integral y no de forma parcial o limitada al expediente en curso, y se podrán tener en cuenta situaciones anteriores o concomitantes que demuestren la voluntad de entorpecimiento y podrá ser tomada en cuenta como tal.

Finalmente, se incluye como marco expreso de toda la regulación, las convenciones y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que rigen en la materia, y que se vuelven, más allá de la evidencia en cuanto a vigencia y supremacía, un marco referencial ineludible.

En síntesis, lo que se pretende con esta propuesta es reformar, ordenar, actualizar y sistematizar una de las herramientas procesales más relevantes con las que cuenta el sistema penal.

Por último, en la convicción de que la presente ley ayudará a la generación y consolidación de la vigencia de nuestro Estado de Derecho y a mantener un proporcional equilibrio entre los derechos y garantías de raigambre constitucional, y agradeciendo la colaboración de todos los legisladores que han participado en las discusiones a lo largo de estas semanas en cada una de las comisiones que trataron esta importante temática, solicito -adelantando el voto favorable de Unión por Córdoba- la aprobación del presente proyecto.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración, en general, los proyectos compatibilizados 18951 y 19079/L/16, tal como fueran despachados por las comisiones respectivas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.

A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.

—Se votan y aprueban los artículos 2º al 4º inclusive.

Sr. Presidente (González).- Aprobados. Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-12-

Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes expedientes: 19478, 19492, 19581, 19584, 19585, 19593, 19596, 19597, 19598, 19599, 19603, 19611, 19612, 19614, 19615, 19617, 19618, 19619, 19620, 19622, 19623, 19624, 19626, 19627, 19637, 19638, 19639, 19640, 19644, 19645, 19646, 19647, 19649, 19650, 19651, 19652, 19653, 19654 y 19655/L/16, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.

-Ocupa la presidencia el Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.

-13-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 18047/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):

Córdoba, 22 de agosto de 2016.

Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18047/L/16, por motivos que oportunamente expondré en el recinto, en la 26° sesión ordinaria del 138° período legislativo, del día 24 de agosto de 2016.

Se trata del proyecto de ley iniciado por los legisladores Arduh, Nicolás, Capitani y Juez, sustituyendo el artículo 46 de la Ley 8024, referido al cálculo del haber jubilatorio.

Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.

Miguel Nicolás
Legislador provincial.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento formulada por el legislador Nicolás.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Legislador, ¿va a hacer uso de sus cinco minutos para la reconsideración?

Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: nosotros presentamos este proyecto porque cuando acompañamos algo que creíamos justo, la derogación del diferimiento del pago a los jubilados, lo hicimos total y absolutamente convencidos, aun sabiendo de las críticas mediáticas que podíamos recibir como bloque de la oposición. Pero también ese día nos comprometimos a trabajar para que se cumpla la Constitución y se le pueda restituir el 82 por ciento a los jubilados y que íbamos a presentar un proyecto en la próxima sesión.

Cuando acompañamos lo hicimos convencidos de que teníamos que tomar todas las medidas y considerar las necesidades de la Provincia, no buscábamos mezquinamente ningún tipo de rédito político. Pero hoy -no lo digo yo, sino la marcha multitudinaria que hubo reclamando lo que es justo-, les digo a los representantes de los trabajadores que no concurrieron a esa marcha, que han sido criticados por ellos mismos, no por mí. Si ustedes abren los diarios de hoy -con los adelantos que tiene la tecnología- allí dicen que el secretario general del gremio del SUOEM reclamaba la presencia de quien muchas veces le dijimos desde esta banca que no se puede ser juez y parte. Pero no lo digo yo, lo dicen los mismos compañeros de Pihen.

Antes le podían echar la culpa al Gobierno nacional porque es cierto que la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Unión por Córdoba no era buena, era total y absolutamente pésima, y tenían esa excusa. Pero ahora, ¿qué excusa tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba? Si el Gobierno nacional se está comportando bien, hasta problemas internos le ha traído porque creen que se están poniendo muy cerca algunos oficialistas con el Gobierno nacional, en contra de lo que muchas veces piensa otro que pretende -o pretenderá- allá por el 2019 querer sentarse en este sillón.

Ya no hay excusa, señor presidente. Si antes era la falta de plata, ahora hay obras millonarias que la Nación le da a Córdoba. Veía con entusiasmo cuando el Gobernador decía que iban a hacer obras por 60 o 70 mil millones de pesos que venían de la Nación, plata que no pone la Provincia, lo que quiere decir que le puede llegar a sobrar, ya que son obras que tenía que hacer la Provincia de Córdoba. Inventan cifras millonarias para presentar un déficit y no restituirles a los pobres jubilados el 82 por ciento que les prometieron en campaña.

El planteo que hago, señor presidente, y si me lo permite el Pleno, es que hay que ponerse a trabajar de cabeza en este tema, ya que es una necesidad y un reclamo que piden los trabajadores en actividad y los jubilados que, después de haber hecho un esfuerzo

durante toda la vida, están esperando que les devolvamos lo que les corresponde. Lo digo aun con las costas que tenemos nosotros, porque es cierto que también tenemos esa carga, pero debemos buscar plenamente una solución.

Por todo esto, voy a hacer la propuesta de que este proyecto pase a comisión y sea tratado con una moción de preferencia, dejando pasar tres sesiones. Lo pongo entonces a consideración del Pleno, ya que creo que a este tema hay que darle un corte definitivo, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración para el tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Nicolás.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Como el proyecto no tiene despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).-Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- ¿El autor del proyecto quiere agregar algo?

Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- No crea que me sorprende; le digo esto con total y absoluta franqueza, señor presidente, simplemente, porque esto es lo que tiene que hacer y no poner el proyecto en consideración para rechazarlo en dos minutos, como piensan hacerlo, para que yo no pida el tratamiento sobre tablas, no para perjudicar a los jubilados

¡Realmente, no me sorprende, presidente, porque esto es lo que tiene que hacer! ¡Hay que ponerse del lado de la gente! Y a esto no se lo digo yo, lo dice la misma gente.

Perdone que levante la voz, señor presidente, pero es que usted cree que me va a sorprender y no es así. ¿Sabe lo que me sorprende? ¡Que no escuchen a la gente! ¡Qué los representantes sindicalistas no levanten la mano en defensa de los trabajadores! Eso sí que me sorprende, señor presidente.

Ratifico en un todo lo que dice el proyecto. Los que tienen que decir por qué no lo aprueban son ustedes, no nosotros.

Sr. Presidente (González).- Le pido, legislador Nicolás, que no se convierta en exégeta del pensamiento de la Presidencia.

Yo no tengo que hacer nada. He sometido a la consideración del Pleno un pedido de reconsideración que usted formuló y, tan sorprendido yo como usted, ratifico que el Pleno - casi por unanimidad- ha resuelto dar el tratamiento sobre tablas, así que estamos procediendo de acuerdo a lo que marca el Reglamento de la Cámara, como corresponde.

Tiene la palabra el señor legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.

En principio, quisiera preguntarle al legislador Nicolás si no mira hacia atrás cuando se refiere a la votación, porque cuando habla lo hace generalizando, y la verdad es que uno viene acompañando todas las medidas que benefician a los trabajadores.

Ahora, ¿cuál es la autoridad para hablar de los trabajadores, cuando en millones de medidas que hemos realizado las organizaciones sindicales, muchos de los legisladores que dicen hablar en nombre de los trabajadores, jamás han concurrido? En ese sentido, creo que hay que hacer una autocrítica, lo que va dirigido también a los dirigentes, ya que la solución no la da una sola persona sino, en esta Cámara, la damos todos.

Todos consideramos que hay que devolverles el 82 por ciento móvil a los trabajadores. La medida de fuerza de hoy fue excelente y el Gobierno provincial tiene que rever su decisión de descontar los días a los trabajadores que pidieron reabrir las paritarias. Vivimos un conflicto social muy importante porque no sólo se les está licuando el salario a los trabajadores sino que ya no les alcanza el pan ni el agua para poder subsistir.

Señores legisladores: acá sí hay representantes de los trabajadores que están a la altura de las circunstancias; no todos somos lo mismo.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Señor presidente: tengo años de historia de luchar por el tema de la Caja y el legislador preopinante también tiene años de política. La Caja siempre tuvo problemas y los trabajadores sufrimos recortes no solamente de este Gobierno sino también por parte de Gobiernos anteriores.

Realmente, lamento que no hubieran tenido esta posición el 23 de diciembre cuando en este recinto se votó la Ley 10.333, porque ese bloque en pleno la votó a favor. Entonces, no comprendo tanto énfasis en la adhesión a los trabajadores que demuestran hoy cuando estamos en la calle peleando porque vienen por todos nuestros derechos. Los trabajadores son los que deben juzgar a sus dirigentes; por lo tanto, este bloque de Unión por Córdoba... (risas y aplausos). Perdón, ¡fue un furcio muy grave! Este bloque, Córdoba Podemos, fue el único que por unanimidad rechazó y votó en contra de esta ley. Por lo tanto, creo que el legislador no tiene autoridad para hablar de la forma que lo ha hecho.

¡Y no les voy a regalar nada! (Risas).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: espero que se haga costumbre aprobar las reconsideraciones, por lo que tengo esperanzas de que se aprueben los dos pedidos de reconsideración que tengo para hacer en la sesión de hoy. Muchas gracias porque veo que han cambiado de actitud.

En relación al proyecto presentado por el legislador Nicolás, debo señalar algunos conceptos porque creo que las cosas deben ser dichas con claridad. Hace unos días, en un programa de televisión, fui calificado por un legislador como un “pronosticador malo o errado”. Quiero recordar que el 16 de diciembre del año anterior, desde esta banca, planteé que se debía derogar la Ley 10.078, y dije que se debía fijar una fecha, porque el Gobernador había dicho 120 días y ustedes no querían fijar fecha. Asimismo, expresé que se venían con algo más que iba a afectar a las jubilaciones. Resultado: dieron la razón a mi pronóstico y el 23 se despacharon con lo que fue la Ley 10.333, la cual –hay que decirlo- fue sancionada porque los 23 legisladores del bloque o interbloque Juntos por Córdoba, etcétera, votaron a favor. De lo contrario, esa ley no pasaba.

Señor presidente: le quiero recordar a la legisladora Nebreda –a través suyo- que el de ellos no fue el único bloque sino que los tres legisladores de la Izquierda sostuvimos una posición contraria. En mi caso particular lo hice por partida doble: el 16 y el 23 de diciembre. Por si fuera poco, el mismo 23 de diciembre se publicó una nota de mi autoría en el diario La Voz del Interior alertando sobre el problema. Entonces, el “pronosticador” la pegó.

Acá sucede lo siguiente: la movilización de hoy fue terriblemente importante; fue una movilización retardada en relación a la Ley 10.333, ya que la tendrían que haber convocado mucho antes. Los dirigentes sindicales juraron y perjuraron que iban al paro, pero no fueron nunca.

Ahora van por otra situación que tiene que ver con el proyecto que voy a presentar para que sea tratado sobre tablas -y que, cuando solicite la reconsideración, lo voy a poder fundamentar con más elementos-, que tiene que ver con que ahora no solamente vamos a la 10.333, sino a la no sé cuánto, que cambia el haber jubilatorio.

El proyecto del legislador Nicolás tiene que ver con el cálculo del haber jubilatorio que ustedes modificaron no solamente con la 10.333 sino con la 9.504, que estableció el promedio de los últimos 48 meses, y ese es el punto que no apoyo de ese proyecto -que si lo cambian, lo voto. Pero vamos a la 8.024 original, porque con la Ley 9.504 no vamos a tener el 82 por ciento móvil, que era un principio consagrado y que enorgullecía al sistema previsional cordobés. Necesitamos derogar las Leyes 9.504 y 10.333 y hacer el cálculo tal cual se establecía en la 8.024 original; de esa manera vamos a tener el 82 por ciento móvil que el legislador Nicolás pretende con su proyecto, pero hay que eliminar esa parte.

Ahora se está discutiendo no los 48 meses sino el promedio de los últimos 120 meses y el resultado va a terminar siendo una jubilación del 50 por ciento. Lo pronostiqué el 16 y 23 de diciembre, a la mañana, a la tarde y lo sigo sosteniendo, y es lo que piensan todos los trabajadores que se movilizaron hoy y los que no, pero que apoyan esa movilización.

Lo que hay que discutir es si vamos a respetar o no el 82 por ciento móvil del salario bruto, sin vueltas, sin macaneos, sin el 82 del 89, sin engaño, sin cifras en negro, como corresponde. Nuestro bloque se pronuncia porque se respete así a rajatabla, eso es lo que

está en discusión, eso es lo que reclaman los trabajadores, lo que está planteado en todos los elementos.

Por último, si se aplica la Ley 8.024 se va a ver cómo el déficit de la Caja responde a otros problemas y no a cuánto cobran los jubilados.

Mi planteo es que abramos el debate, y si el legislador Nicolás está de acuerdo con eliminar lo de la 9.504, cuenta con mi voto.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: la posibilidad de debatir este punto de manera tan atolondrada muestra la falta de seriedad para discutir el problema tanto del bloque radical, que presenta la modificación de una ley que votó, como del oficialismo, que pretende discutir con el mecanismo de la chicana una problemática de fondo. Hoy, miles de trabajadores estatales ganaron la calle y esta Legislatura les responde con esta mueca, porque no es más que eso.

El bloque radical, los últimos días del año pasado aprobó la Ley 10.333 y al otro día, en otra mueca, presentó un proyecto semejante que lo vienen reformulando para pintarse la cara cuando son, junto con el Presidente Macri, los que vienen para llevarse puesto el 82 por ciento móvil en todo el país, porque tienen un acuerdo "Pampa" con el Gobernador Schiaretti para armonizar la Caja de Jubilaciones y venderle a la Caja de la Nación para que todos los jubilados de la Provincia cobren la mísera jubilación mínima nacional, ese es el programa y proyecto político de los gobiernos nacional y provincial para nuestros jubilados y ancianos.

Por eso el proyecto de ley que actualmente ha presentado tiene profundas limitaciones, porque implica volver a la Ley 9.504, que también tuvo el día de su aprobación una importantísima movilización que, lamentablemente, no terminó en un plan de lucha para derrotarla, producto de acuerdos y de confiar en la Justicia que siempre termina fallando a favor el Poder Ejecutivo provincial.

No podemos volver a la 9.504 y estamos en contra del segundo párrafo del proyecto de ley presentado por el legislador Nicolás, que pide que se calcule la base remunerativa sobre las últimas 48 remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes. Ese es el mecanismo y el planteo de Unión por Córdoba cuando votaron la 9.504, y lo hicieron junto con el radicalismo.

Esa no es la salida que los trabajadores están discutiendo en sus lugares de trabajo; esto es porque el radicalismo nunca pisa una asamblea en su lugar de trabajo, discute simplemente en las oficinas de esta Legislatura, porque si hubieran ido a las asambleas de la semana pasada que se hicieron prácticamente en todos los hospitales de la Provincia de Córdoba, hubieran visto que estamos peleando para que el 82 por ciento móvil sea calculado sobre el último salario y no sobre estos 48 meses, porque esa es la ventana por la cual han metido el ajuste para los jubilados. Vamos por la defensa irrestricta de la Ley 8024, sin modificaciones. Esa es la discusión que tenemos que llevar adelante. Y si, efectivamente, el legislador Nicolás quita el segundo párrafo, o simplemente la modificación de que la base remunerativa simplemente sea calculada en base al último salario, va a contar con el pleno acompañamiento.

Esto es parte de la solución del problema, por lo tanto, decimos que vamos a aprobar el proyecto de ley sólo con esas consideraciones.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: no salgo de mi asombro, fui al baño y, cuando volví, me encontré con que estamos tratando la Ley de Jubilaciones. No es la primera vez que sucede esto en la Legislatura.

Tres veces se ha tratado la Ley de Jubilaciones desde que soy legislador: cuando entró la ley de diferimento, a las dos horas estaba aprobada, después, cuando derogaron el diferimiento, a las dos horas y 45 minutos estaba aprobada. Y ahora, me fui al baño y me encuentro con que están tratando la Ley de Jubilaciones. Supongo que es una broma, no de parte de quien ha propuesto tratarla sino una broma del oficialismo, una broma que cada tanto tiempo hacen ustedes y que realmente les sale mal. Y voy a explicar por qué les sale mal.

Ustedes no pueden ni intentar seriamente hablar de las finanzas públicas de Córdoba y, más concretamente, lo que tiene que ver con el financiamiento que está haciendo la Provincia de la Caja, cuando ayer han entrado en la lista de los "pobres de la tierra". Ayer, con este decreto del Presidente, se han puesto en la misma fila que La Rioja, Formosa, de

los que no supieron cuidar lo propio y van a mendigar al Estado nacional. Fíjense lo que dice Macri: “Córdoba se ve impedida en forma transitoria de atender financieramente los compromisos más urgentes”.

Ustedes, muchachos, están en cesación de pagos, no están para hacer ninguna broma, y menos una broma que después tome la prensa y los jubilados de Córdoba se enteren de la seriedad con que nosotros abrimos los debates de la Ley de Jubilaciones.

Yo no voy a entrar al fondo del tema porque estoy convencido de que a ustedes ni se les ha pasado por la cabeza someter a consideración seriamente el tema de la Ley de Jubilaciones. Simplemente, quiero recordarles, mientras miro este decreto del Presidente, que ésta es una de las provincias más ricas del país, a la que se le dio todo, y ahora estamos en la fila de las provincias más pobres de la Argentina.

Me acuerdo de los mil millones de pesos que se gastaron solamente entre el hotel de Ansenúza, la publicidad y propaganda del año 2015, entonces, ¿ahora van a mendigar 100 millones de pesos?

Yo creo que esto no da para más, y a los que quieran entrar en el debate les digo que lo piensen, porque hay cosas muy importantes para debatir en materia de jubilaciones en la Provincia de Córdoba que no merecen este tratamiento. A mí me encantaría tratar el tema de las jubilaciones, de los cientos de miles de pesos que cobran los jueces jubilados, realmente me gustaría tratarlo, pero seriamente.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Font.

Sr. Font.- Señor presidente: coincido con respecto al legislador que se expresó en el sentido de que quizás estamos ingresando precipitada e improvisadamente en un tema demasiado serio.

Solamente quiero aclarar que nuestros jubilados no tienen dueños, nuestros trabajadores no tienen dueños, son ciudadanos; aquellos que pretendan venir a alabar su representación en este ámbito, presumiendo de auténtico representante y pretendiendo juzgar al resto de la representación que ejercemos los partidos mayoritarios, que lo hacemos desde hace muchísimos años, cuando pusimos nuestra piedra basal para decir que la nuestra era la causa de los desposeídos y ahora ellos tienen que luchar para acreditar una representación y una defensa que a veces les cuesta, olvidan que la Unión Cívica Radical, en lo que tiene que ver con la etapa democrática iniciada en el '83, defendió con uñas y dientes la soberanía de la Caja de Jubilaciones, cuando venía el vendaval Cavallo, con todo el menemismo dispuesto a llevarse la Caja con propósitos no santos, precisamente.

Me parece que esto de estar cada uno defendiendo su representación en un debate no tiene nada de positivo, sino que se trata de repartir culpas, conociendo un montón de hechos, conociendo que la Caja de Jubilaciones en su oportunidad, a través del sacrificio de todos nuestros jubilados, fue salvada de un colapso y de ser llevada por la Nación.

Por eso, para no abundar, creo que merece un tratamiento serio, absolutamente técnico, con los datos suficientes; creemos que Unión por Córdoba tiene que hacerse cargo del estado de la Caja -es deficitaria, no es deficitaria, le cobra intereses, no le cobra intereses-, nunca han respondido, nunca dijeron nada, lo van a tener que decir.

Pero para discutir de esto seriamente, señor presidente, propongo al Pleno la vuelta a comisión de este proyecto para un tratamiento como creemos que realmente se merece.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Legislador Font, ¿es una moción de orden lo suyo?

Sr. Font.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por...

- Manifestaciones de la legisladora Vilches fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Efectivamente, es una moción de orden, debo ponerla en consideración.

En consideración la moción de orden formulada por el legislador Jorge Font, de vuelta a comisión del proyecto en cuestión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, la sorpresa del tratamiento de este proyecto sólo puede entenderse si se plantea de manera irresponsable un proyecto que no se pretende que vaya a ser discutido, salvo que sea un pronunciamiento para la tribuna de parte del bloque que lo propuso, porque allí se entiende entonces que a nivel nacional hayan sido parte del voto de la Ley de Blanqueo que, justamente, pone en jaque el problema de las jubilaciones. Es el mismo Gobierno -y son parte de la coalición de Gobierno- que está atacando las condiciones de vida de esos jubilados a través del aumento de las tarifas, con la inflación y la devaluación que su propio gobierno lleva adelante, y con el conjunto de su plan económico.

Realmente, hoy ha sido un pronunciamiento de los trabajadores que han salido a la calle masivamente, convocados tardíamente por las conducciones sindicales, porque han pasado más de ocho meses de gobierno -o estamos en el curso del octavo mes de gobierno-, y es una de las primeras medidas, todavía muy tibia, para pretender frenar el descontento que hay entre las bases.

Tampoco puede decirse mucho del gobierno de Unión por Córdoba, que ha atacado, evidentemente, las condiciones de los trabajadores jubilados, sistemática y sucesivamente, en el último caso con la Ley 10.333, con las modificaciones del recálculo de los haberes jubilatorios.

Y si hoy se va a discutir el problema del régimen jubilatorio, lo que los trabajadores defienden es la vuelta a uno de los regímenes más beneficios que han tenido que es el del 82 por ciento móvil sobre el último año de salario.

Desde ese punto de vista, acompañamos lo que los trabajadores reclaman, y sostenemos que hay que volver a la Ley 8024, con las modificaciones que sostienen los trabajadores.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Ilda Bustos.

Sra. Bustos.- Señor presidente: simplemente, voy a referirme a la exposición que ha hecho el legislador Nicolás. No es la primera vez que se refiere de una forma casi molesta sobre la existencia de alguna representación sindical en esta Unicameral, y lo digo porque se ha pronunciado entrometiéndose en la vida interna de las organizaciones sindicales y de los dirigentes sindicales, que a los que les tienen que rendir cuentas es a los trabajadores que representan.

Por eso, quiero aclarar que pertenecemos a un sindicato que no tiene mayoría de trabajadores estatales, aunque sí una pequeña parte, y pertenecemos a una central, a una confederación, a una CGT, y nos hemos expresado; aparte de que hoy ha habido trabajadores en la calle, desde el mes de febrero hay trabajadores en la calle convocados por todas las organizaciones sindicales que conforman la CGT. Nos hemos pronunciado por el abuso en el incremento de los precios, por los despidos a todo nivel –estatales y privados-, por el cierre de las pequeñas empresas, por el tarifazo, junto con los vecinos que vienen reclamándolo, por la precarización laboral y, sobre todo, en múltiples ocasiones, en contra de los recortes jubilatorios.

Pero, no estamos dispuestos a soportar que haya una especie de tribunal, sobre todo por parte de quienes representan a las fuerzas políticas que, en numerosas ocasiones, han realizado muchas acciones en contra de los derechos de los trabajadores. No quiero ponerme a hacer historia porque no viene al caso, pero todos nos conocemos en Córdoba y sabemos cuál es la historia de la Caja, de dónde viene el déficit, sobre el que nosotros hemos tenido y tenemos propuestas, y creemos que hay muchos sectores que las tienen.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, como no es costumbre de este bloque, pedimos la abstención porque nos parece ilógico lo que está planteando el bloque de la Unión Cívica Radical, cuando ha votado a favor, en todas sus formas, que le saquen el 15 por ciento a nuestros jubilados. Entonces, creo que es injusto.

Además, cuando uno plantea que los trabajadores han sido representados –como lo planteaba muy bien la legisladora Bustos- ante todas las fallas que han tenido tanto el

Gobierno provincial como el nacional, nosotros siempre hemos estado a la altura de las circunstancias.

Aparte, no solamente a nuestro lugar nos lo dieron nuestros compañeros, sino que tenemos la legitimidad para hablar desde el lugar que nos corresponde, que es representar a los trabajadores, porque a nosotros nos eligen para representar a nuestros compañeros. Entonces, ése es nuestro lugar de legitimidad.

Además, si hay algo en lo que las centrales obreras se han expresado en este tiempo es sobre el conflicto social que estamos viviendo.

En verdad -como dije recién-, me hubiera gustado que muchos legisladores que hoy hablan, hubieran estado presentes en el palco con las distintas centrales obreras.

Aparte de eso, señor presidente, no se respetaron los acuerdos de Labor Parlamentaria. Por eso, legislador Gutiérrez, me gustaría que cuando esto se ponga a consideración, lo tengamos en cuenta en Labor Parlamentaria.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pihen.

Sr. Pihen.- Señor presidente: no debería ampliar lo que ha dicho mi compañera, la legisladora Bustos, pero he pedido el uso de la palabra, primero, porque he sido aludido y, segundo, porque observo que hay un legislador que desde hace un tiempo ha asumido el papel de censor de las tareas de los representantes gremiales acá.

Hace poco, supongo que habiendo sido designado como jefe de personal de la Cámara, cuestionó que algunos de nosotros no estuviéramos en el recinto. Obviamente, ni averiguó por qué no estábamos.

No me referiré a la cuestión de fondo, pero sí apelaré a la memoria que viene de lejos -no a la memoria de ahora-, y voy a comenzar con la Ley 8024, a la que hemos defendido muy férreamente hasta que entendimos, después de leerla -y por eso no hemos vuelto a decir que queremos la 8024, podríamos quererla en algún aspecto-, que -dicho sea de paso- tampoco establece que la jubilación corresponde al último salario; la Ley 8024 decía que la jubilación correspondía al mejor salario de la carrera.

Pero parece que alguien se olvidó que la Ley 8024 era la ley que consagraba todos los privilegios y todas las jubilaciones de privilegio -que, obviamente, no eran para los laburantes- que arrimaron un buen fosforito al déficit de la Caja. Primera recordación.

Segunda recordación: nosotros conocimos el Decreto 1777, no somos nosotros, ni fuimos los dirigentes sindicales los que planteamos ni los que apoyamos ese decreto; fuimos los que lo combatimos en la calle.

Nosotros no nos hemos expresado en contra de la armonización ahora. Lo hemos hecho cuando alguna fuerza política -antes de las elecciones de fin de año- reclamaba que se armonizara en Córdoba, y lo hacía alguien que hoy es diputada nacional.

Sigo: cuando se trató la Ley 10.078, por lo menos en lo personal, creo que todos saben que en el ejercicio de la representación, el que suscribe votó en contra, y eso no exculpa de ninguna responsabilidad a nadie, como votamos en contra la 10.333.

Pero también debo decir que, en términos de memoria, se le reclama a la dirigencia sindical que no se haya movilizado antes. Al día siguiente, por empezar, el día de la sanción de la Ley 10.333, ya había compañeros movilizados acá. Y al día siguiente comenzó una serie de movilizaciones que no se han detenido nunca, porque hay una cuestión en la que sí nosotros estamos totalmente de acuerdo: la defensa de la Caja y, por supuesto, la vigencia del 82 por ciento -como digo- sin ninguna clase de armonización.

Entonces, por ahí es cómodo olvidarse que uno ha propuesto la armonización. Por ahí es fácil acordarse de que uno es autor del Decreto 1777, por ahí es fácil olvidarse cómo se ha votado en la historia, y por ahí es fácil, de "de un plumazo" en un discurso desconocer cuál ha sido la trayectoria de los gremios en este tema.

El hecho de que algún gremio no haya estado hoy en la movilización de ninguna manera quiere decir que no esté de acuerdo con el planteo. Como bien lo señaló la compañera Ilda Bustos, hay un grupo de gremios estatales que estamos en la calle desde el mes de abril, y que vamos a volver a estar en la calle el día viernes próximo.

Sin entrar al fondo de la cuestión, porque seguramente el presidente de nuestro bloque planteará nuestra posición, me parece que es necesario tener un poquito de cuidado, tener mucho de memoria y de respeto, y no convertirse en jefe de personal o censor de los legisladores que representamos a los trabajadores.

Muchas gracias.

-El legislador Nicolás pide la palabra.

- El legislador Pihen fuera de micrófono solicita que se cierre el debate.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Pihen, pero tengo a los legisladores Salas, Peressini y Guitiérrez que han solicitado el uso de la palabra.

Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: estamos discutiendo las formas, que tienen mucho significado político, no lo niego, pero además estamos en condiciones de hacer un debate serio si queremos hacerlo. En tal sentido, hay que tomar posición.

Quiero señalar que cuando alguien plantea un proyecto tiene un fundamento, y podemos discutir ese fundamento. Resulta que ahora vamos a tener que comenzar a buscar las informaciones de un tema que ha conmovido a esta provincia en los últimos cinco o seis años, o más si comenzamos en el año 2008 cuando se aprobó la Ley 9504, y mucho antes con el Decreto 1777.

Entonces, el problema es que hay que tomar posición, y me parece que con tanto pase de factura, porque todos tienen “un muerto en el placard”, no quieren pronunciarse sobre lo que deben hacerlo.

Díganle al pueblo de Córdoba, a los jubilados y a los trabajadores activos –porque el problema para estos últimos es mucho mayor que para los jubilados porque ya les mandaron la inconstitucionalidad de la Ley 10.033 y violaron el artículo 57 de la Constitución Provincial- qué van a hacer con sus jubilaciones.

Hay que definirse. ¿Vamos a respetar el 82 por ciento del mejor sueldo? ¿Vamos a respetar la Ley 8024? Al respecto, el legislador Pihen hacía referencia a los privilegios, pero con este cuento de los privilegios pagan siempre los otros, porque sé que existen jubilaciones de recontra privilegio, pero esas nunca se tocan, a esas les asisten todos los derechos, pero a las restantes se las tocan a todas.

El problema central acá es el siguiente: díganle a los trabajadores de Córdoba cómo van a calcular el haber jubilatorio. El Frente de Izquierda dice: el 82 por ciento del mejor salario bruto, como rezaba la Ley 8024. Si el legislador Nicolás le saca lo de la Ley 9504, vamos con eso. Pronúnciense sobre eso, es muy sencillo ya que todo el mundo debe tener posición tomada, no nos escapemos con el cuento de si el otro me dijo, aquel me dijo o el otro tiene tal intención. Las intenciones están todas claras, pero los trabajadores de Córdoba tienen que saber qué es lo que quiere hacer esta Legislatura con sus jubilaciones.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: el debate ha llevado a que, efectivamente, tengamos la posibilidad de discutir qué jubilación queremos para nuestros jubilados, y esto es lo que los legisladores no están informando o, por lo menos, no se están expresando, y sólo el legislador Gutiérrez tiene la posición del resto del bloque mayoritario.

En ese sentido, consideramos que la ley como la dejó la 10.333 no puede seguir siendo la reglamentación legislativa utilizada para calcular las jubilaciones porque significa un recorte del 11 por ciento. Ante esto, el Frente de Izquierda se pronunció -en el momento de votación, y lo hacemos ahora- totalmente en contra.

El problema con las jubilaciones de privilegio incorporadas en la Ley 8024 es que siguen estando vigentes con la Ley 10.333 y con todas las modificaciones, porque ni con los decretos ni con las reformas se tocaron esos privilegios. Avancemos en eso, entonces, ya que la Cámara está en estado de comisión.

Lamentablemente, el Frente de Izquierda no puede acompañar el proyecto presentado por el legislador Nicolás porque –como dije- en el segundo párrafo utiliza el modo de cálculo que presentó Schiaretta, en su momento, con la Ley 9504 –que también repudiamos.

Por todo esto, vamos a presentar un proyecto en disidencia -que acercaremos a Secretaría- para que quede clara nuestra posición.

La posición del bloque mayoritario de Unión por Córdoba es clara: defiende la Ley 10.333 porque, hasta el momento, no ha presentado ninguna modificación al respecto y la siguen defendiendo, porque van a votar en contra el proyecto presentado por el legislador Nicolás.

Además, el bloque del legislador Nicolás presentó un proyecto de modificación, tiró la piedra y ahora esconde la mano, porque pide la vuelta a comisión siendo que la Cámara está en comisión.

Queremos saber cuál es el proyecto de la minoría de esta Cámara para los jubilados.

Con respecto al pedido de abstención del bloque Córdoba Podemos, creemos que podemos seguir trabajando para ver cuáles son las posiciones políticas, porque aquí el

bloque mayoritario no quiere dar la cara en nombre del Gobierno, y el resto está escondiendo la mano sin saber lo que quieren, porque antes pedían la armonización y ahora no la quieren, y no sabemos cuál es la situación de nuestros jubilados.

Claramente, con ninguno de los proyectos vigentes les vamos a dar mejor calidad de vida a los jubilados.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado la palabra porque quiero saber cuál es la posición del oficialismo. No puedo argumentar una respuesta, como uno de los autores del proyecto, si no sé cuál es su posición.

Lo que dijo el legislador Pihen lo dije yo cuando aprobamos la Ley 10.333, y lo ratifico: la aprobamos porque derogaba el pago diferido a los jubilados -era una posición tramposa.

Yo los escucho, y les juro que no salgo de mi asombro.

Reitero: lo que dijo Pihen lo he dicho yo. El Decreto 1777 era un decreto, y sé que todavía estamos pagando las consecuencias. Pero ya pasaron 17 años, Pihen -se lo digo a través suyo, señor presidente-; desde hace muchos años Unión por Córdoba gobierna esta Provincia, ya no nos pueden echar la culpa a nosotros.

Recuerdo cuando nos preguntaban: “¿no se dan cuenta ustedes, los radicales, que los trabajadores están en la calle?”. Hagamos memoria, porque eran ellos los que estaban en la calle. Hoy, quizás, algunos no estén en la calle -vaya a saber por qué, quién les habrá dicho que no vayan-, pero yo nunca pongo en tela de juicio la defensa que hacen los gremialistas -gremialistas, repito-, que se ponen al hombro tanto el salario como las jubilaciones.

Quizás no les ha gustado lo que he dicho, pero -repito- no lo dije yo, lo dijo Daniele -mañana va a salir en el diario-; él dijo que lo extrañaban en las marchas. Lo extrañan en las marchas; hoy está sentado en su banca, no está en la marcha, y creo que esa multitud no se equivocó en el reclamo.

Nosotros nos podemos haber equivocado con el decreto, por eso ustedes hoy son oficialistas y nosotros somos oposición.

A través suyo, señor presidente, le quiero decir al legislador Saillen, que siempre he respetado a los que hacen verdadero gremialismo en defensa de los trabajadores. No me pongo ese “saco”, no es porque no quiera, y les aseguro que por ahí ustedes lo están haciendo mejor que uno. Pero, reitero que la gente está en la calle, me lo sabía decir el legislador Presas -que se está levantando-, y no me pongo en jefe de personal, pero hago uso de la memoria de lo que nos decía el legislador Presas defendiendo su legítimo derecho desde la banca.

Lo escuché, me sorprendí y se lo dije al legislador Font -a quien le tengo un especial respeto-: “no van a pasarlo a comisión porque quieren sacarse el problema de encima”. En vez de solicitar el pase a comisión habría que quedarse hasta que terminemos. Puedo analizar lo que dicen los legisladores de la Izquierda, no lo hago para sacar rédito, no. Nos quedemos hasta que sea necesario, señor presidente.

Es cierto que no están preparados por la burla que el oficialismo hace de este tema, porque es una burla. Han sorprendido a la oposición, es cierto; pero yo no me sorprendí porque los conozco, sé cómo se portan, cómo se esconden y para colmo son mentirosos, señor presidente -perdóneme, lo digo con mucho respeto, porque esto que están haciendo es una mentira, piadosa será, pero es una mentira.

Cuando recién manifestaba que la Provincia está recibiendo mucho de la Nación, lo decía porque ha cambiado la gente, ha votado otra cosa, señor presidente; le aseguro que esto no es lo que ha votado, no ha votado esta burla que el oficialismo está haciendo. Nosotros no lo hacemos como burla, el radicalismo es consciente del Decreto 1777 y tenemos, quizá, más dolor del que ustedes tienen, del que Pihen tiene, porque nosotros lo hicimos, asumimos la responsabilidad, pero ya hace 17 años. En aquel momento lo hicimos porque tenía que salvarse la Caja y gobernábamos nosotros. ¿Por qué creen que ustedes están sentados allí y nosotros acá? Por hemos cometido errores, ahora no cometan ustedes los mismos errores, señor presidente.

Hoy les tengo que decir las mismas palabras que ustedes nos decían a nosotros: “la gente está en la calle” y ha sido fuerte la movilización; gracias a que se terminó la pelea con la Nación, hoy la Provincia está en otra situación para encontrar una solución para los jubilados. Por lo tanto, creo que esto no merece un pase a comisión, sino que tendríamos que quedarnos hasta que las velas no ardan para ver si encontramos una solución.

Pero antes que me cierre el debate, pediría con seriedad, sin gritos para que nadie se enoje, y con la prudencia que se necesita para tratar este tema, que me digan cuál es la posición, porque los acompañamos en la Ley 10.333 porque para mí -lo dije y lo reitero- era

mejor que la que estaba vigente, no en la que le reintegramos o pretendemos que se le reintegre a los jubilados el 82 por ciento.

Haciendo reserva, señor presidente, le pediría primero escuchar la posición del oficialismo a los efectos de ver cómo le damos curso a este despacho.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en primer término, a través suyo, le voy a hacer un pedido personal y especial al legislador Nicolás, que pide prudencia y demás. Le voy a solicitar que no grite tanto, simplemente eso y me doy por conforme.

Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Acepto.

Sr. Gutiérrez.- Quiero recordarle a la Presidencia que hay una moción efectuada por el legislador Pihen de cierre del debate ...

Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador Gutiérrez, la Presidencia aclaró que tomaba la moción del orden del legislador Pihen de cierre del debate, sólo que había 4 legisladores, incluido usted, que habían pedido la palabra antes de la moción del legislador Pihen.

Continúe en el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Lo tengo claro, señor presidente, simplemente abundo en la aclaración a partir de la reserva que acaba de manifestar el legislador Nicolás.

El bloque de Unión por Córdoba no votó en su momento el pase a comisión efectuado por el legislador Font porque, en general, el bloque había sido aludido y dos legisladores nuestros –que hicieron uso de la palabra– merecían y querían dar desde bloque una respuesta.

Pero tenía razón el legislador Saillen cuando manifestaba –no sé por qué a mí en particular– hace algunos minutos que lo que ha sucedido aquí es que no se cumplió un acuerdo llevado a cabo en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, porque allí se planteó que este proyecto pasaba a comisión. Eso es con lo que nosotros vinimos al recinto y, después, se nos comunicó que esta situación se había modificado.

Los acuerdos están para cumplirse, señor presidente. A veces, como presidente de bloque, y como le pasaría a cualquier compañero, también tengo, a partir de posiciones que asumimos en la Comisión de Labor Parlamentaria, discusiones en lo interno de nuestro bloque; pero entiendo que si hay un acuerdo tiene que privilegiarse el mismo y, en todo caso, deponer actitudes y alguna individualidad que tiene, a lo mejor, esas características y que no están en discusión.

Por lo tanto, cuando uno no tiene en cuenta esto, que también son valores como es el respeto de los acuerdos, se equivoca de ida y de vuelta, y por eso requiere permanentemente que nosotros le demos la base de sustentación para que él pueda justificar un discurso que no estaba acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

Por eso, señor presidente, el bloque de Unión por Córdoba va a proponer la vuelta a comisión de este expediente para seguir discutiendo allí, no la Ley de Jubilaciones, como aquí algunos pícaros han querido caratular este expediente y que ha sido muy claro de parte del legislador Nicolás, sino el cálculo del haber jubilatorio.

Por lo tanto, el bloque de Unión por Córdoba propone la vuelta a comisión del presente expediente.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el legislador Gutiérrez.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

—CÁMARA EN SESIÓN—

-14-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 19486/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 23 de agosto de 2016.

Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 19486/L/16 citando al Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, para que informe sobre los términos de las negociaciones entabladas con la ANSES en relación al régimen previsional.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del legislador Salas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: gran parte de lo que iba a decir ahora lo he dicho en el punto anterior, pero el proyecto es simple.

Hay negociaciones con la ANSES y con el Gobierno nacional sobre la situación de la Caja; hay un planteo de la ley mal llamada de reparación a los jubilados, que en realidad debiera ser de estafa a los jubilados, donde dice que la Provincia en las discusiones con las provincias se tienen que cumplir una serie de requisitos, en función de lo cual se va a medir la asistencia de la Nación a la Provincia, o a la Caja provincial. Entre esos puntos está lo que hemos discutido recién, que es el cálculo del haber jubilatorio. No sabemos qué es lo que va a ir a discutir Giordano, no tenemos la menor idea; no está en ningún lado, y hay cuestiones que provocan movilizaciones tan importantes como las de hoy y que suscitan debates tan álgidos en las que se requiere tener claridad.

Queremos saber con qué planteo, con qué mandato, con qué disposiciones va a ir quien vaya a discutir con la ANSES y con el Gobierno nacional. No queremos sorpresas, como tuvimos con la 10.333, que nos enteramos dos horas antes que habían decidido cambiar el cálculo del haber jubilatorio. Y como está planteado que ésa es una de las posibilidades -más otras en las que no quiero abundar ahora porque la que más importa en el reclamo de los trabajadores es ésta, pero hay otras que se pueden llegar a discutir, incluso hay una ligazón con el problema de la modificación de la edad jubilatoria si la Nación cambia, etcétera-, es necesario que venga el ministro y aclare. Corresponde que lo haga en la Legislatura porque en ella están los representantes directos del pueblo; corresponde que venga acá y diga qué es lo que va a hacer, y que esta Legislatura tome posición, la fije y la establezca a través de proyectos o de planteos.

Entonces, llamo a que se reconsidere la negativa a discutir este punto, que simplemente consiste en citar al ministro para que venga y explique nada más que eso.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Salas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-15-

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 19534 y 19535/L/16, ambos con mociones de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora Nebreda, las que serán leídas a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 23 de agosto de 2016.

Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos que se otorgue el estado parlamentario para el tratamiento sobre tablas al proyecto 19534/L/16, solicitando informes al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba sobre distintos aspectos, para la sesión ordinaria 26 del 138º período legislativo, a desarrollarse el día 24 de agosto del corriente año.

Sin más, lo saludo cordialmente.

Carmen Nebreda
Legisladora provincial

Córdoba, 23 de agosto de 2016.

Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos que se otorgue el estado parlamentario para el tratamiento sobre tablas del proyecto 19535/L/16, solicitando informes al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba sobre distintos aspectos, para la sesión ordinaria 26 del 138º período legislativo a desarrollarse el día 24 de agosto del corriente año.

Sin más, lo saludo cordialmente.

Carmen Nebreda
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas que acaban de ser leídas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, hoy tengo que expresar que después de mucho tiempo que fuimos presentando distintos proyectos, ayer tuvimos la presencia en la Comisión de Educación del Secretario de Relaciones Institucionales y la Secretaria de Educación, el doctor Carlos Sánchez y la licenciada Delia Provinciali.

Hoy opté por hacer uso de la palabra porque los temas que discutimos ayer son los temas del año próximo. Estamos discutiendo temas que van a incidir directamente en el año 2017.

Le voy a pedir, señor presidente, trabajar con los dos temas juntos porque son correlativos.

En el tema de las salas de 3, proyecto de ley 10.348, acompañamos positivamente ya que estamos convencidos de que los niños deben ingresar a la escuela lo antes posible, fundamentalmente aquellos que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad, pero también planteamos ese día que eso iba a ser progresivo y se iba a avanzar si las escuelas tenían las condiciones necesarias para hacerlo realidad.

Estamos terminando agosto y vemos que esta realidad se está comprometiendo, ya no es tan fácil decir que vamos a contar con las 200 aulas que planteó el señor ministro para Salas de 3 años, y con las 200 aulas para extensión de jornadas -que también se plantearon aquí-, es decir, 400 aulas, 200 para el interior y 200 para Capital para salas de 3 y para extensión de jornadas, y siete escuelas. Debo recordar que se planteó que se había cumplido con el 92 por ciento de las salas de 5 años, por lo tanto, todavía hay remanentes.

Señor presidente: quiero plantear que esto está faltando en las salas, y si uno analiza la otra propuesta vemos con preocupación que cuando analizábamos el Presupuesto 2015, la realidad nos decía que se había cumplido solamente con el 39 por ciento del presupuesto, que lo que se habló en junio también se cumplió en diciembre. Por lo tanto, hoy vemos con mucha preocupación que en junio del año 2016 se ha cumplido con el 9,26 por ciento del Presupuesto educativo para reparación e infraestructura escolar. Esto realmente nos preocupa, hay áreas en las que esto tiene una gravedad inusitada.

Para las escuelas rurales, señor presidente, se cumplió solamente con el 1,82 por ciento; para programas de construcción de aulas -donde están estas 400-, con el 6,93 por ciento; Programas de Reparación y Construcción de Escuelas, con el 9,67 por ciento. Se planteó que cambió del Ministerio de Obras Públicas al de Educación, pero realmente tenemos la misma relación que teníamos el año pasado, que en junio se había cumplido con el 50 por ciento del presupuesto establecido para Educación y a fin de año, cuando se hace la reasignación, solamente se cumple con el 39 por ciento.

Quiero decir, señor presidente, que vamos a estar ante serias dificultades para trabajar en el año 2017 si seguimos subejecutando el Presupuesto educativo.

Hoy, el Presupuesto educativo para Infraestructura se ha cumplido en un 9,26 por ciento y hay un compromiso de cumplimiento al año del 20,98 por ciento.

También quiero plantear que el Presupuesto Educativo sobre el total de la Provincia es el 29 por ciento; que el Presupuesto de Infraestructura Educacional, sobre el total del Presupuesto, es del 1,20 por ciento, y que el de Infraestructura Educacional ejecutado hasta el momento es del 0,11 por ciento, señor presidente.

Aclaremos que el Presupuesto para Infraestructura Educacional y su impacto en el total del Presupuesto para Educación, es del 4,14 por ciento.

Señor presidente: creo que hoy estamos ante una grave situación de incumplimiento con las metas propuestas por el mismo Ministerio de Educación y el Gobierno en relación a las salas de 3, 4 y 5 años, para poder seguir trabajando en las escuelas sin problemas.

Si comparamos el Presupuesto para infraestructura en Educación ejecutado al 30 de diciembre es de 95.579 millones de pesos, es decir, el 0,87 por ciento, con lo gastado en infraestructura en esta Legislatura, que tiene un Presupuesto de 202.163.915 pesos, que es de 47,23 por ciento y significa 95.479.000 pesos, vemos que el Ministerio de Educación gastó en infraestructura, durante los seis primeros meses, lo mismo que esta Legislatura, que tiene muy poco presupuesto.

Señor presidente: quiero dejar claro también que cuando se nos informó -a pedido de las comisiones de trabajo- las condiciones edilicias de muchas escuelas, tenemos informes que dicen "Edificio operativo. Tareas necesarias de realizar: reparación eléctrica, cobertura de techo, plan de mantenimiento, emergencia edilicia", pero está operativo; o "Edificio operativo. Reparación general del edificio. Obra en plan de emergencia", pero está operativo. Es decir, existen contradicciones en los mismos informes.

Agradezco profundamente que hayan concurrido las autoridades a la comisión, ya que tuvimos una larga reunión, pero quiero dejar asentado -como lo hice ayer en la misma reunión de comisión- que estamos discutiendo el año 2017 en lo que refiere a Educación, y hay graves problemas para el cumplimiento de las metas en lo edilicio, lo que complica también el cumplimiento de las metas pedagógicas ya que no se puede dar clases en

escuelas y edificios que no cuentan con baños, que tienen problemas eléctricos, o de rajaduras de techos, cloacas o –lo que este año ha sido gravísimo- de falta de gas.

Por todo esto, señor presidente, quiero dejar sentado que recibimos el informe, lo analizamos y lo discutimos, pero quedan muchas cosas por saldar, sobre todo en lo que hace a la ejecución del Presupuesto, y eso que sólo lo hemos analizado en el aspecto infraestructura escolar, lo que muestra claramente cuáles son las prioridades al momento de destinar el dinero para las obras.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Nebreda.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-16-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 19600/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 22 de agosto de 2016.

Señor
Presidente Legislatura Unicameral
de la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S / D

De mi consideración:

En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 19600/L/16, iniciado por los legisladores Nicolás y Quinteros, solicitando la intervención del señor Gobernador de la Provincia ante el desconocimiento del titular de la EPEC del fallo judicial que ordenó anular los aumentos de las tarifas eléctricas en todo el país.

Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.

Juan Pablo Quinteros-Miguel Nicolás.
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: voy a aprovechar que el legislador García Elorrio fue al baño para que cuando vuelva también tenga la sorpresa de que se ha aprobado el tratamiento sobre tablas de este proyecto, constituyamos la Cámara en Comisión y lo debatamos.

Con el legislador Nicolás, durante cinco años –en mi caso tres años y medio- fuimos representantes de la oposición en el Ente Regulador de Servicios Públicos, por lo que más de una vez hemos fijado posición en este tema, y nos pareció importante y que ameritaba en esta oportunidad presentar una solicitud para que el Gobernador de la Provincia de Córdoba instruya a la Empresa Provincial de Energía para que cumpla una medida cautelar que dictó la jueza federal del Partido bonaerense de San Martín, doctora Martina Forns, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada oportunamente por una empresa prestadora de un servicio

médico, disponiendo la suspensión de los incrementos dispuestos por las Resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la número 1 del Ente Regulador de Electricidad, ENRE.

Debo aclarar que esto no es una cuestión de oportunismo político sino de justicia para con los usuarios que se ven no solamente sobrepasados por no poder afrontar el pago de las tarifas sino también excesivamente confundidos porque todos los días reciben informaciones distintas. Ya nos resulta difícil a nosotros dar las explicaciones técnicas, imagínese lo que significa para los usuarios.

Voy a apelar para que esta medida cautelar sea respetada por el Gobernador de Córdoba y por la Empresa de Energía Eléctrica y que la tarifa se retrotraiga a febrero de este año, es decir, antes de la entrada en vigencia de las resoluciones citadas, porque -haciendo una pequeña histórica- recordemos que en febrero en Córdoba la tarifa eléctrica aumentó casi un 40 por ciento. De ese 40 por ciento, el 16,5 era del valor agregado de la distribución y que son los sucesivos aumentos que veníamos discutiendo en audiencias públicas sistemáticamente y que llevó en los últimos años a un aumento superior al 500 por ciento, muy por arriba de cualquier índice de inflación, solamente en lo que era el valor agregado de distribución. En cuanto a la compra de energía mayorista no se aumentaba porque estaban vigentes las resoluciones dictadas por el Gobierno anterior que subsidiaban las tarifas. Por supuesto, no vamos a entrar a la consideración de los subsidios y de cómo se subsidiaba a EDENOR y EDESUR y cómo se subsidiaba a la EPEC. Sabemos que en Buenos Aires se subsidiaba también el valor de distribución y en Córdoba no.

Imaginamos que el oficialismo va a aprobar este pedido de reconsideración y podremos tratar sobre tablas el tema para que se apruebe el pedido para que el Gobernador le solicite a la EPEC que retrotraiga la tarifa tal como lo hemos solicitado básicamente por dos cuestiones, que voy a fundamentar citando declaraciones del actual y del ex Gobernador.

El ex Gobernador De la Sota nos está enseñando por las redes -y le quiere enseñar al Gobierno nacional- a tener sensibilidad social y apela a este término en reiteradas oportunidades afirmando que hay que gobernar con sensibilidad social. Por su parte, el Gobernador Schiaretti hace pocos días, con motivo de la resolución que retrotrajo la tarifa del gas, expresó que los fallos de la Corte no están para interpretarse sino para acatarse. Al respecto, quiero decirle al Gobernador Schiaretti que los fallos y las medidas cautelares de los jueces federales que abarcan a todo el país también deben ser respetados, tal como los que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esto tiene el agravante que la cuestión de fondo será resuelta por la Corte en los primeros días de setiembre. A su vez, la Corte Suprema ha sentado jurisprudencia con respecto a la falta de convocatoria a audiencias públicas, por lo que sucederá exactamente lo mismo con la audiencia pública que no se realizó para la compra de energía mayorista, por lo que seguramente se deberá retrotraer la tarifa a esa fecha.

Con el legislador Nicolás conocemos acabadamente el cuadro tarifario y también sabemos del padecimiento del usuario porque durante cinco años lo vimos peregrinar por el Ente Regulador de Recursos Públicos solicitando estas cuestiones. Además, hemos ido a cada una de las audiencias públicas convocadas, casi en soledad porque, lamentablemente, han bastardeado de una manera increíble el sistema de audiencias públicas, por eso la gente no confía y ni siquiera quiere asistir. Es por ello que expresamos que el cuadro tarifario de la EPEC va a cambiar porque la medida cautelar ha cambiado el cuadro tarifario en lo que hace a compra de energía.

Y así como en su momento la EPEC disimuló el 16,5 de aumento del valor agregado de distribución, metiendo en el mismo combo...

Sr. Presidente (González).- Legislador, han concluido sus cinco minutos; por favor, finalice su exposición.

Sr. Quinteros.- El cuadro tarifario ha cambiado y, así como en su momento se le aumentó la tarifa a los usuarios por haber aumentado el precio de venta de energía mayorista a CAMMESA, ahora este precio, por una cautelar, ha disminuido, con lo cual esto tiene que ser trasladado de manera inmediata a los usuarios.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Quinteros.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-17-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 19625/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 23 de agosto de 2016.

Al Sr. Presidente
De la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
Lic. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 19625/L/16, instando al Ejecutivo en cesar con los descuentos y aprietes a los trabajadores estatales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: no pensaba pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, pero las expresiones vertidas ayer por el Gobernador más lo sucedido en el día de hoy con los trabajadores estatales que salieron a la calle, me llevan a querer traerlo a discusión.

El planteo se refiere, en particular, a una acción que tomó el Ministerio de Educación respecto de trabajadores docentes que hicieron asamblea el día 12 de agosto y de trabajadores de la Salud que salieron a una movilización anunciada los días 11 y 12 de este mes.

La medida atenta contra derechos de huelga, de organización y derechos sindicales, pero va más lejos, porque el problema central es que lo que se pretende es un objetivo que tendría un carácter reaccionario que es impedir la manifestación de problemas. Sabemos que todos los paros están precedidos de innumerables cantidad de reclamos, pero si los docentes o los trabajadores de la Salud no paran ¿cómo nos enteramos de los problemas?, ¿cómo la población ve representadas las cosas que padecen?

La situación de los hospitales –que sigo recorriendo- es terminal y ya lo dije, los trabajadores de la Salud salen a la calle, se movilizan y hay que escucharlos porque junto a ellos escuchamos a los pacientes que tienen problemas no solamente por un día -como se suele decir- porque los trabajadores hicieron una medida de lucha, sino los que tienen habitualmente. Se pretende matar al mensajero en lugar de abordar el problema y solucionarlo.

Entonces, la pretensión de este proyecto de resolución es que se inste a estos dos Ministerios en particular, pero podemos hacerlo extensivo hasta el Gobernador, a que no hagan aprietes y descuentos y que aborden los problemas porque con los aprietes y descuentos no solucionamos nada, los vienen haciendo desde hace años y los problemas son cada vez más graves.

En defensa del derecho de huelga y de la lucha por solucionar los problemas e ir al fondo de la cuestión presenté este pedido, y en la negativa y en los aprietes está el interés de sostener otras cuestiones, la mercantilización y privatización de la Salud y la Educación

entre otras cosas. Por estas razones, mediante este proyecto de resolución, insto a estos Ministerios a que cesen en esta práctica y que escuchen el mensaje.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Salas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-18-

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 19629 y 19633/L/16, con mociones de tratamiento sobre tablas, que serán leídas a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 23 de agosto de 2016.

Al Sr. Presidente
De la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
Lic. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de resolución 19629/L/16, pedido de informes respecto del destino de personal policial absuelto en sede administrativa en la causa "Narcoescándalo" y en el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Orlando Víctor Arduh
Legislador provincial

Córdoba, 23 de agosto de 2016.

Sr. Presidente de la
Legislatura Unicameral
De la Provincia de Córdoba
Martín Miguel Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 19633/L/16, que expresa rechazo y malestar por la resolución del Tribunal de Conducta Policial que dispuso liberar de responsabilidad a 40 efectivos que estaban en pasividad por el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.

Jorge Horacio Font
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas que acaban de ser leídas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Para un pedido de reconsideración, tiene la palabra el legislador Font.

Sr. Font.- Señor presidente: podríamos llamar a esto “el regreso de los amotinados”.

Necesitamos llamar a la reflexión sobre esta tremenda claudicación institucional, política y, fundamentalmente, ética del Gobierno de la Provincia ante la decisión tomada de la quita de situación de pasividad de aquellos policías facciosos que sometieron a los ciudadanos de la Provincia de Córdoba al terror, a la indefensión.

Y hablo del Gobierno de la Provincia de Córdoba porque aquí no vale el argumento de que el Tribunal de Conducta Policial no juzgó, no resolvió y, por lo tanto, vamos a volverlos a la actividad quién sabe en qué condiciones. Esto es un agravio a aquellos cordobeses que vieron violentados y vulnerados su seguridad física y, fundamentalmente, sus bienes por esta “manga de facciosos”, que usted, señor presidente, sabe perfectamente lo que significó la insubordinación policial, el amotinamiento, la ruptura de la cadena de mandos; lo que significó el hecho de sumir a la población en un verdadero terror del cual todavía no sale, para el cual todavía no ha encontrado las explicaciones del caso. A esto lo asemejo a la situación de una víctima de un delito cuando el victimario ha sido sometido al encarcelamiento y se apresta a salir, esa situación le causa terror. A la ciudadanía de Córdoba le causa terror el hecho de que los amotinados, quién sabe si pronto, estén con sus uniformes haciendo como que defienden a los cordobeses.

Parece que no se hubiera tomado nota de la gravedad institucional y política que significó aquel hecho que avergonzó a Córdoba y a todo el país: policías amotinados, no solamente de brazos caídos sino indicando a los delincuentes cuáles eran las zonas liberadas, indicándoles qué tenían que hacer para seguir provocando desastres en la ciudad, y hoy los vemos nuevamente -y quién sabe por qué razón, y eso es lo que nos preguntamos- puestos en actividad.

Acá no me vengan con que la Justicia todavía no se ha expedido y que está en manos de ella; evidentemente, acá hubo una lesión gravísima al decoro, a la dignidad institucional de la Provincia, a la buena fe y a la tranquilidad de los cordobeses, razones más que suficientes para que ya tuvieran una sanción que, incluso, se pudiera llegar a la exoneración.

Resulta que ahora el Gobierno de la Provincia decide nuevamente ponerlos en actividad; dirán que no les darán uniformes, que no les darán armas, ya lo vamos a ver pronto.

Por lo tanto, queremos expresar nuestro absoluto repudio, desagrado, y les pedimos que hagan una lectura política acerca de qué creen ustedes que piensa la población sobre esta medida que se toma.

Les pedimos reflexión, que el Estado no claudique. A lo mejor hay datos que no conocemos, que pueden tener que ver con presiones, con conflictos, con “aprietes” que puede estar sufriendo desde la Policía, y no va a ser la primera vez que la cadena de mandos esté interrumpida o esté rota. Pero sepan que la población los está mirando y está repudiando la vuelta de los facciosos a la calle.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración recién formulada.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-19-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19643/L/16, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 24 de agosto de 2016.

Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del proyecto 19643/L/16; se trata de un proyecto de declaración expresando preocupación por las declaraciones del titular del Tribunal Superior de Justicia, doctor Sesín, en relación a la independencia de la justicia, la calidad institucional y sobre los hechos de corrupción en la Provincia. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan Carlos Quinteros
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: en verdad, cinco minutos resulta muy poco tiempo para tantas cosas que habría que decir sobre el Tribunal Superior de Justicia, su actuación en los últimos años y las declaraciones de su presidente.

Tratando de ser breve, debo decirle que no con sorpresa el día 20 de agosto en el periódico La Voz del Interior leí el título de la nota que concedía a ese medio el doctor Domingo Juan Sesín, donde decía: “En Córdoba hay menos corrupción que en otros lados”. En verdad, que me adentré en la lectura de la misma para ver qué nos estaba por contar Sesín de lo que pasaba en Córdoba con los hechos de corrupción y qué sabe que nosotros como legisladores no sepamos, porque no solamente el título me llamó la atención sino también el contenido de la nota.

Antes de referirme a algunos párrafos de lo que dijo el presidente del Tribunal superior, quiero decirle que como persona formada en el Derecho y habiendo trabajado en el Poder Judicial, a nosotros nos enseñaron que los jueces hablan por sus sentencias, y respecto a sentencias del tipo de hechos de corrupción a Sesín no le vamos a conocer ninguna porque no solamente no hay ninguna causa que haya llegado al Tribunal Superior de Justicia sino que ni siquiera hay causas que hayan sido expuestas en audiencia de debate en la Cámara del Crimen. También deberíamos hacer un gran esfuerzo para ver causas donde la Fiscalía de Anticorrupción haya imputado a funcionarios públicos de relevancia.

Sesín, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, decía que Córdoba tiene una calidad institucional superior al resto del país y que el Poder Judicial de Córdoba tiene independencia, calidad e idoneidad, sólo falta mejorar los procesos y acelerar los tiempos.

Referido a lo que recién decía el doctor Jorge Font, debo decir que los policías que han vuelto a la actividad hace 33 meses que están siendo investigados por un Poder Judicial que no ha tomado ninguna resolución al respecto, independientemente de que el Tribunal de Conducta debería haber tomado otra medida y otra actitud. Pero mire cómo se van emparentando las cosas: hace 33 meses que la Justicia de Córdoba no puede resolver si los policías del amotinamiento del 3 y 4 de diciembre son o no responsables de un delito. En verdad, es una falta de respeto que el presidente del Tribunal de Conducta diga que sólo falta mejorar y acelerar los tiempos.

También expresó que hay injerencia cero por parte del Ejecutivo. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando empezó a hablar del Fuero Anticorrupción, y que el doctor Sesín diga tan claramente cómo son las estadísticas de dicho fuero y cómo funciona porque el Ministerio Público Fiscal tiene una ley particular y es un órgano que tiene independencia orgánica y funcional, con lo cual el que nos tendría que contestar –de última- cómo funciona el Fuero sería el Fiscal General de la Provincia, el doctor Alejandro Moyano, al que no lo escuché expedirse sobre esta cuestión.

Simplemente, me parece que a nosotros nos tiene que preocupar lo dicho porque la pregunta que le deberíamos hacer a Sesín es que si en Córdoba hay menos corrupción que en otros lados, ¿cuánta corrupción hay en Córdoba? Que la Justicia provincial nos diga cuántos funcionarios públicos fueron sentados en el banquillo de los acusados porque, a juzgar por las estadísticas, en Córdoba hay cero corrupción, ya que no hay ningún funcionario público que haya sido sometido a una audiencia de debate, a un juicio donde se

pueda determinar su culpabilidad en algún hecho y sea condenado como marcan los códigos.

Lo más grave que dijo Sesín en esa nota fue una crítica -no directa pero sí soslayada- respecto a las denuncias que se presentan por parte, en este caso, de legisladores de la oposición.

Debo decir al doctor Sesín que siempre que nosotros hagamos una denuncia va a tener un tinte político porque nosotros –y el doctor Sesión lo debe conocer- Ohacemos política, ya que somos legisladores, y porque nos eligieron justamente para eso, para tener una función política y, evidentemente, toda nuestra labor estará impregnada de la cuestión política. Pero eso no significa que no llevemos pruebas; les puedo decir que de puño y letra he firmado más de una denuncia en la que he tenido prueba sobrada y ha muerto en los despachos de los fiscales anticorrupción de Córdoba.

En verdad, el día sábado, cuando vi estas declaraciones me causó un profundo malestar ver que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en lugar ver cómo mejorar la calidad institucional -de la pésima y paupérrima calidad institucional que estamos teniendo en Córdoba-, no solamente no hace una autocrítica, sino que sostiene que en Córdoba hay una calidad institucional de excelencia y, no solamente eso, sino también tiene el tupé de criticar a quienes denuncian diciendo que las denuncias son pocos fundadas.

Me parece que tenemos que reconsiderar este tema, verdaderamente manifestar nuestra preocupación por las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia y solicitarle que tenga lo que tiene que tener alguien que dirige el alto Cuerpo: prudencia, medida y respeto.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por el legislador Quinteros.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-20-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 19656/L/16, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 24 de agosto de 2016.

Al Sr. Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 19656/L/16, proyecto de resolución que cita, en los términos del artículo 101 de la Constitución provincial, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos por el caso del Fiscal Ramírez.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, presenté este proyecto para solicitar la citación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Angulo, porque entendemos que lo que se conoció más abiertamente en el día de ayer, pero que ya fue noticia anteayer, a partir de una entrevista del periodista Dante Leguizamón al fiscal Raúl Ramírez, no puede pasar desapercibido en esta Legislatura, que votó los pliegos por los cuales se lo designó.

Entendemos que hay una responsabilidad del Gobierno de Unión por Córdoba en que este personaje esté y haya estado no sólo como fiscal hasta el momento –y, de hecho, sigue cumpliendo sus funciones, por eso hemos solicitado la destitución inmediata-, sino que ha revestido y cumplido cargos y puestos de jerarquía en los distintos gobiernos de Unión por Córdoba.

Nos resulta un poco inverosímil que Unión por Córdoba no haya conocido los antecedentes de Raúl Ramírez; nos resulta inverosímil que un personaje que estuvo vinculado al Estado, fuera como policía o en algún cargo de gobierno, o ahora como fiscal, no se hubiesen conocido estos antecedentes.

Y nos resulta inverosímil que viniendo de un gobierno como el de Unión por Córdoba, que tiene ya dieciséis años de gestión, y que lo designó para cargos de jerarquía -porque estuvo como parte de la Dirección de Drogas Peligrosas y otras en áreas de jerarquía vinculadas a la seguridad- justamente no haya conocido dichos antecedentes.

Ahora, cuando se conoce la noticia, se confirma, o por lo menos nosotros entendemos mejor y cierra de alguna manera el círculo de la política que venimos denunciando sistemáticamente desde el PTS y el Frente de Izquierda sobre la seguridad de este Gobierno, porque qué son los casos de gatillo fácil sino ejecuciones sumarias, como las que se habituaba y se utilizaba bajo la dictadura. Qué son esos “corralitos” totalmente repudiados por la sociedad sino un sometimiento a vejámenes y torturas; qué son las torturas -de las que se conoce también en muchas comisarías- a la juventud de los sectores populares y trabajadora sino parte de la misma política y método que ejecutó la dictadura.

Entonces, amén de los maquillajes que se hicieron, por ejemplo, al Código de Faltas viejo que permitía todo este tipo de arbitrariedades, así como ahora, más allá del jury que presentan los legisladores de Unión por Córdoba, al cual, aparentemente, se suman otros legisladores de distintos bloques, creemos que hay responsabilidad absoluta en la designación de este fiscal.

Por eso, no puede pasar desapercibido el tratamiento de esta problemática en la Legislatura a horas de que se lea la sentencia de uno de los principales juicios en nuestra Provincia, donde se juzgan no sólo causas, no sólo delitos de lesa humanidad en la causa que atañe al centro de detención La Perla, sino también en el D2.

El pedido de citación a este ministro para que traiga toda la información referida a los antecedentes del fiscal Raúl Ramírez, así como para que se presente y explique por qué aún no se han abierto todos los archivos que están en poder del Estado, no sólo de la dictadura sino de los años previos porque, como bien explicó el fiscal Trotta en la reunión...

Sr. Presidente (González).- Legisladora: se han cumplido sus cinco minutos. Concluya.

Sra. Vilches.- ...porque, como ha demostrado el fiscal Trotta, tiene que retrotraerse al '74, a partir del Navarrazo, del golpe policial.

Entonces, queremos que se abran todos los archivos, porque así se evitaría que surjan tipos como Ramírez. ¿O tenemos que esperar que una nueva investigación periodística dé a conocer cuántos de los “Ramírez” quedan todavía no sólo en las fuerzas policiales sino también en otras áreas del Estado?

Por otra parte, y con esto...

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra la legisladora Chiappello.

Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.

Perdón por lo extemporáneo, pero solicito que se agregue como coautores en el expediente 19648/L/16 a mis compañeros de bancada.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Gutiérrez a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 19 y 44.

***Nora Mac Garry – Graciela Maretti
Subdirectorras del Cuerpo de Taquígrafos***